

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-1362-2021
CARATULADO : VARGAS/FISCO / CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Antofagasta, once de Abril de dos mil veinticuatro

VISTOS:

Con fecha 26 de mayo de 2021, comparece don **Jorge Mayne Moller**, abogado, en representación de Aleksandra Katarina Rendic Vargas Y Doña Cecilia Mireya Vargas Estay, todos domiciliados en calle Arturo Prat N° 461, Oficina 707, Antofagasta e interpone demanda de indemnización de perjuicios, en Juicio de Hacienda en contra del FISCO DE CHILE, persona jurídica de derecho público, representada legalmente para estos efectos por el Abogado Procurador Fiscal de Antofagasta del Consejo de Defensa del Estado, don Carlos Bonilla Lanas, con domicilio en calle Arturo Prat N°482, oficina N°301 de esta ciudad.

Funda su demanda en los siguientes hechos:

Indica que con fecha 01 de Junio de 2017, aproximadamente a las 18:00 horas, la demandada, Aleksandra Rendic, caminaba junto a don Juan Pablo Galdames por calle Ricaventura, de esta ciudad, observando como funcionarios de Carabineros controlaban a unos jóvenes que se encontraban sentados en un parque ubicado en la misma calle, procedimiento que consideró abusivo y por ello comenzó a grabar con su celular lo que estaba sucediendo. Agrega que poco después, los funcionarios que estaban realizando el procedimiento de control de identidad a los jóvenes del parque, cruzaron la calle, se les acercaron a la demandante y su acompañante y les pidieron su carnet de identidad, los cuales entregaron, como también permitieron que revisaran la mochila que traían y sus billeteras. Luego de concluir el registro por parte de los funcionarios de carabineros y notoriamente molestos porque los habían estado filmando y no les pudieron encontrar nada producto del registro, uno de los funcionarios le pide a don Juan Pablo Galdames que le entregue nuevamente su billetera a lo que éste se niega, por lo que el funcionario intenta quitarle la billetera por la fuerza y al no lograrlo llama a otro funcionario para tomarlo detenido.

Refiere que debido a ello, la demandante toma la billetera de Juan Pablo y camina a su casa que se encontraba a media cuadra del lugar de los hechos, en ese momento, de forma sorpresiva y sin decirle nada, es atacada



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JVVLMXPWBX

violentamente por el funcionario de Carabineros, quien la toma del cuello y el brazo derecho, dándole una vuelta, aplicándole luego una llave en la pierna izquierda, para hacerla caer bruscamente al suelo, escuchándose un ruido propio de una fractura de la misma pierna. La demandante comienza a sentir inmediatamente un intenso dolor en la pierna, y debido al ruido que escuchó con el impacto, dedujo que se había fracturado, situación que manifestó al funcionario de carabineros, quien lejos de prestarle ayuda, la dio vuelta para ponerla boca abajo y la esposó con las manos en la espalda, y aun cuando se encontraba completamente inmovilizada, de forma completamente abusiva e injustificada, se sentó sobre ella y empezó a llamar por radio para pedir ayuda a otros funcionarios, hecho que provocó un aumento del dolor que sentía la víctima por la posición en que se encontraba.

Indica que la actora empezó a llorar y a suplicarle al funcionario que se pusiera de pie, porque tenía un dolor intenso en la pierna y que su peso le estaba causando aún más dolor. Los transeúntes que caminaban por el lugar empezaron a increpar al funcionario quien, pese a los reclamos de las personas, y al llanto de la víctima, seguía sentado sobre ella, varios de los transeúntes empezaron a grabar lo que sucedía, y el funcionario que se encontraba sentado en los glúteos de la demandante, se pone de pie y le pone la rodilla en la espalda, aplastando esta vez su brazo que se encontraba esposado. Señala que la misma seguía llorando y pidiendo que no se sentaran sobre ella por el dolor intenso que sentía pero el funcionario hizo caso omiso. Varios minutos después el funcionario se pone de pie, la toma de las esposas, la levanta y la obliga a caminar, pese a que la víctima exclamó en innumerables ocasiones que le habría roto la pierna, por lo que no podría caminar, pero en respuesta recibió empujones por parte del funcionario para que avanzara, con la finalidad de llevarla detenida, todo eso mientras infería una serie de insultos, hasta que por fin, luego de mucho esfuerzo, logró subir al vehículo institucional de Carabineros.

Expresa que en lo videos que disponen, es posible apreciar cómo el funcionario de Carabineros además agrede de forma verbal a uno de los transeúntes por estar grabando lo que sucedía, al punto de tirar de forma violenta el celular de un solo golpe al piso, interrumpiéndose la grabación en ese momento. Mientras tanto, tres funcionarios de Carabineros mantenían detenido a Juan Pablo Galdames, quien tras ver la agresión sufrida por la actora, se encontraba alterado por no poder socorrerla. Entre los tres funcionarios subieron a Juan Pablo en el mismo vehículo policial donde se encontraba la demandante.



Luego en el carro policial, la actora, Juan Pablo Galdames y otra persona que había sido detenida por grabar lo ocurrido, son llevados a un condominio cercano en busca de otra persona que buscaban también sólo por grabar con su celular lo que había sucedido. Había muchos carros policiales y estuvieron cerca de 40 minutos esperando que esa persona que se encontraba en su domicilio, en definitiva lograra ser detenida. Se escuchaba como los carabineros le insistían que borrara los videos que tenía en su celular, ante esto el joven borro los videos y posteriormente lo detuvieron, acusándolo de agredir a un funcionario de Carabineros.

Refiere que luego de esta larga espera, los detenidos son llevados a constatar lesiones, y en el establecimiento asistencial, la demandante, fue objeto de burlas principalmente del mismo funcionario que le causó las lesiones, que incluso le dijo que “le volvería a fracturar la pierna tres veces si él quería”. La demandante pedía que le sacaran las esposas, pues ya estaba inmovilizada por la fractura de su pierna, ante lo cual los funcionarios se burlaban. Agrega que Aleksandra es examinada por un médico, quien constata fractura de peroné izquierdo, situación que constituiría una lesión grave de acuerdo al Dato de atención de urgencia N° 1706010160, de fecha 01 de junio del año 2017, emitida por la Unidad de Urgencia, del Centro Asistencial Norte.

Posteriormente, en Subcomisaría de Antofagasta Norte, donde fue trasladada la demandante, la situación de abuso continuó. En un primer lugar, arguye que la misma les pidió ayuda para ingresar a la comisaría ya sea apoyándose en un funcionario o bien en una silla de ruedas, lo que se le negó indicándole que debía desplazarse saltando. Una vez dentro, una de las funcionarias de carabineros que se encontraban en la subcomisaria le pidió que se sacara los aros y piercing, accediendo, sacándose todo salvo un piercing de su boca, explicándole a la funcionaria que para sacarlo se requiere un procedimiento que no es simple, por lo que no podía sacárselo ella misma, la funcionaria entendió, pero su agresor que se encontraba presente le dice “sácatelo o te lo saco yo”, señalando la actora que de ser así haría la denuncia respectiva, recibiendo burlas por parte del mismo funcionario, vulnerando todas las reglas de trato al interior de las comisarías tratándose de detenidas mujeres. Finalmente, aun cuando los funcionarios conocían la gravedad de las lesiones, la mantuvieron de pie en el calabozo.

Aduce que producto de una detención por parte de carabineros respecto de Aleksandra Rendic, quien no se encontraba cometiendo delito alguno, funcionarios públicos, en ejercicio de sus funciones, le causaron lesiones de gravedad y además dentro de un procedimiento abusivo e ilegal, al



punto que el ministerio público no continuó la persecución penal respecto de ninguno de los detenidos aquel día.

Expresa que Con fecha 02 de junio de 2017, debido a que doña Aleksandra estaba presentando también dolor en la rodilla izquierda fue llevada a un establecimiento asistencial (Hospital Militar del Norte) para que se le realizara nuevamente una constatación de lesiones, donde se constató, además, contusión de rodilla izquierda de mediana gravedad.

Señala que según el informe pericial de lesiones realizado en el Servicio Médico Legal de esta ciudad, con fecha 29 de noviembre de 2017, los daños físicos sufridos por la actora son: *“Fractura Distal de Peroné Izquierdo y en Rodilla Izquierda: Rotura de Ligamento Cruzado Anterior, Rotura del Ligamento Colateral Medial, Rotura Parcial del Ligamento Colateral Lateral y Rotura Parcial de la Capsula Articular, compatibles con sufrir una torsión de su extremidad inferior izquierda teniendo el pie fijo en el suelo...”*.

Refiere que como consecuencia de lo anterior, la demandante debió someterse a dos operaciones, la primera, en junio de 2017, para tratar la fractura de su tobillo izquierdo y unir su peroné, luego de la cual se le indica reposo, el uso de bastones y medicamentos; la segunda, en marzo de 2018, en términos generales tuvo por finalidad abordar la rotura de meniscos mediante una reconstrucción de rodilla.

Expone que con fecha 17 de mayo de 2018, doña Aleksandra Rendic se somete a peritaje psicológico denominado “Protocolo Estambul” en el Servicio Médico Legal de Antofagasta, debido a que fue víctima del delito de apremios ilegítimos, peritaje que señala que el *“Inventario de Síntomas SCL-90-R de L. Derogatis, indican que no se observa malestar exagerado o dramatizado por parte de la peritada. Pudiendo presentar síntomas tales como: depresión: al mostrar un estado de ánimo disfórico, falta de motivación, poca energía vital, sentimientos de desesperanza, ideaciones suicidas. Asimismo, cumpliría con los criterios para el diagnóstico de F32.4 Trastorno depresivo mayor, episodio único en remisión parcial (296.2) del Manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales DSM-IV”*. Concluye el peritaje señalando: *“En virtud de la evaluación pericial psicológica realizada en contexto del Protocolo de Estambul, que incluye la lectura de la carpeta investigativa y toda la metodología implementada, se puede informar que doña Aleksandra Katarina Rendic Vargas presenta secuelas psicológicas que ha sufrido en virtud del delito de Lesiones Graves – apremios ilegítimos. Se sugiere que la peritada realice proceso reparatorio a nivel psicológico. Lo anterior, con el objetivo de elaborar la experiencia vivida, tomando en consideración que existe por su*



parte disposición y antecedentes de un trastorno depresivo mayor, con episodio único en remisión.”

Agrega que el funcionario de Carabineros ,fue condenado como autor del delito consumado de apremios ilegítimos y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, previsto y sancionado en el artículo 150 letra d) del Código Penal, en causa penal RIT O-7556-2017 seguida ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, cuya sentencia fue dictada el 27 de noviembre de 2019.

Expone que el día 1 de junio de 2017, y como consecuencia de los hechos descritos y las lesiones provocadas por funcionarios de carabineros, se siguieron una serie de múltiples controles médicos, exámenes, terapias, operaciones y gastos, todos los cuales tuvieron por finalidad y están vinculados con la recuperación de su salud, que manifiestan un directo y evidente perjuicio económico, que, por ser doña Aleksandra Rendic estudiante y sin ingresos propios, debieron ser soportados por la demandante, doña Cecilia Vargas, madre de Aleksandra., según se detalla:

FECHA		DETALLE		VALOR	
1	01/06/2017	BOLETA	Atención Médica	Centro traumatológico MET.	\$20.000
2	02/06/2017	BONO	Radiografía	RESOMAG SpA.	\$13.940
3	02/06/2017	BONO	Consulta Médica	Hospital militar Antofagasta	\$5.940
4	05/06/2017	BONO	Resonancia Magnética	Diagno Image S.A.	\$64.690
5	07/06/2017	BONO	Estudio Radiológico	Clínica Antofagasta	\$9.300
6	07/06/2017	BOLETA	... de rodilla con barras laterales	Centro traumatológico MET.	\$30.000
7	10/06/2017	BONO	Exámenes; Hemograma, glucosa en sangre y otros.	Laboratorio Luis Pasteur Ltda.	\$6.010
8	12/06/2017	BONO	Por Luxofractura de tobillo	Pago a profesional por 1era operación	\$112.376
9	12/06/2017	BONO	Por Luxofractura de tobillo	Pago a profesional por 1era operación	\$20.300
10	12/06/2017	BONO	Por Luxofractura de tobillo	Pago a profesional por 1era operación	\$34.490
11	12/06/2017	BONO	Día cama de hospitalización	Hospital Militar del Norte	\$3.130



1 2	13/06/20 17	BOLETA	Anticipo de pago por 1era operación	Hospital Militar del Norte	\$900.000
1 3	14/06/20 17	BOLETA	Medicamentos recetados	SALCOBRA ND	\$8.886
1 4	23/06/20 17	BOLETA	Retiro de corchetes	Centro Médico traumatólogo MET.	\$10.000
1 5	30/06/20 17	BONO	Exámenes; Creatinina en sangre, isoinmunización y otro.	Hospital Militar del Norte	\$6.150.
1 6	02/07/20 17	PASAJES	ANF – STGO (ida y vuelta)	LATAM	\$392.376
1 7	03/07/20 17	MOVILIZACIÓN	Traslado aeropuerto - domicilio	TRANSVIP	\$24.400
1 8	04/07/20 17	BONO	Consulta Médica	Hospital Clínico Universidad de Chile	\$5.590
1 9	28/07/20 17	BONO	Evaluación kinesiológica, estimulación eléctrica, prueba esfuerzo y otros	Ks. Jonathan Barra Fuentes	\$65.060
2 0	06/10/20 17	BOLETA	Medicamentos	Epilepsia Liga Chilena	\$22.725
2 1	06/10/20 17	BOLETA	Psiquiatría	Super Doc. Médicos especialistas	\$70.000
2 2	10/11/20 17	BOLETA	Consulta Médica	Super Doc. Médicos especialistas	\$70.000
2 3	22/01/20 18	BOLETA	Consulta Médica	Centro Médico HTS SpA	\$16.000
2 4	27/02/20 18	BONO	E.C.G de reposo	Diagno Image.SA.	\$6.220
2 5	27/02/20 18	BONO	Exámenes; Hemograma, perfil bioquímico y otros.	Diagnolab S.A. (Megasalud Antofagasta)	\$14.490
2 6	05/03/20 18	COMPROBANTE PAGO	Profesionales 2da operación.	Hospital del Trabajado ACHS.	\$1.845.000
2 7	05/03/20 18	BOLETA	Consulta Médica	Centro Médico HTS SpA	\$16.000
2 8	08/03/20 18	BOLETA	Medicamentos	SALCOBRA ND	\$65.172
2 9	02/04/20 18	BONO	Inestabilidad crónica de rodilla,	ACHS	\$28.215



			menisectomía, etc.		
30	02/04/2018	BONO	Día cama, apoyo fluoroscópico, evaluación kinesiológica, etc.	ACHS	\$14.640
31	02/04/2018	BONO	Reducción motriz (ejercicio)	ACHS	\$1.450
32	08/04/2018	BOLETA	Pabellón, hospitalización, materiales, etc (2da operación)	ACHS	\$2.284.523
33	14/05/2018	BONO	Evaluación kinesiológica, terapia, prueba esfuerzo y otro	Centro de rehabilitación especializada Galeno Ltda.	\$68.360
34	18/06/2018	BONO	Evaluación kinesiológica, terapia, prueba esfuerzo y otro	Centro de rehabilitación especializada Galeno Ltda.	\$68.360
35	27/08/2018	BONO	Evaluación kinesiológica, estimulación eléctrica, prueba esfuerzo, etc.	Ks. Jonathan Barra Fuentes	\$66.560
36	09/01/2019	BOLETA	Consulta Médica	Centro Médico HTS SpA.	\$16.000
TOTAL			\$ 6.336.353		

Solicita en definitiva tener por interpuesta demanda sumaria de indemnización de perjuicios, en contra del Fisco de Chile, persona jurídica de derecho público, representada por el Abogado Procurador Fiscal de Antofagasta del Consejo de Defensa del Estado, don Carlos Bonilla Lanas, abogado, o quien lo subrogue legalmente, acogerla a tramitación, para que en definitiva se acoja la demanda en todas sus partes, condenando a la demandada al pago de las siguientes prestaciones, como responsable civil de los daños y perjuicios sufridos por mis representadas a propósito de los hechos precedentemente expuestos en el cual tuvieron participación funcionarios de Carabineros de Chile.

1) Respecto de doña Cecilia Vargas Estay:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JVVLMXPWBX

1.-Por concepto de indemnización del daño emergente la suma de \$6.336.353 o la suma que se determine prudencialmente y de acuerdo al mérito del proceso determine.

2.-Por concepto de indemnización del daño moral, la suma de \$40.000.000 o la suma que se determine prudencialmente y de acuerdo al mérito del proceso determine.

3.-Además, que las sumas a las que sea condenada a pagar la demandada se les aplique los reajustes e intereses legales.

4.-El pago de las costas de la causa.

2) Respecto de doña Aleksandra Rendic Vargas:

1.-Por concepto de indemnización del daño moral, la suma de \$100.000.000.- o la suma que se determine prudencialmente y de acuerdo al mérito del proceso determine.

2.-Además, las sumas a las que sea condenada las demandadas se les aplique los reajustes e intereses legales pertinentes.

3.-El pago de las costas de la causa.

Con fecha 22 de abril de 2022, comparece don **Carlos Bonilla Lanas,** Abogado Procurador Fiscal de Antofagasta, en representación del **FISCO DE CHILE,** quien contestando la demanda, solicita su total rechazo, con costas, oponiendo en primer lugar **la excepción perentoria de prescripción extintiva de cuatro años conforme lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil.**

Refiere que el régimen de responsabilidad demandado es el de responsabilidad extracontractual del Fisco de Chile. Agrega que, las acciones civiles y penales son acciones totalmente independientes y diferentes una de la otra. Las penales, tienen por objeto establecer la responsabilidad personal y directa de su autor, por lo que mientras se prolongue su conocimiento la prescripción se interrumpe, pero este efecto es sólo respecto del autor directo, ya que se trata de establecer precisamente su propia responsabilidad en los hechos. Indica que en el presente caso la responsabilidad del Fisco De Chile, es un tipo de responsabilidad absolutamente autónoma y distinta del autor directo de los daños, de índole civil, en que se busca la reparación del daño. Es más, la demanda no solo ha sido deducida ante este tribunal por la víctima de los apremios ilegítimos sino por terceros que no guardan ninguna relación con la causa penal, y tal como dispone el artículo 61 inciso final *“Si no se dedujere demanda en la oportunidad prevista en el artículo precedente, la prescripción se considerará como no interrumpida.”* . En atención a ello, los plazos legales de prescripción siguen corriendo.



Indica que en el presente caso la prescripción de la acción, tal como lo dispone el artículo 2332 del Código Civil, corre desde la perpetración del acto y el plazo es de cuatro años, periodo que en el presente caso ha transcurrido sin que se ejerciera válidamente la acción de indemnización por las demandantes.

Expresa que además, para estimar interrumpida la prescripción de la acción civil para establecer la responsabilidad extracontractual del FISCO DE CHILE, el actor debió ejercer la acción correspondiente dentro de los plazos pertinentes, esto, cuatro años desde la perpetración del acto, esto es, a contar del 1º de junio de 2017, según lo establecido en el artículo 59 del Código Procesal Penal.

De lo anterior, expresa, se puede colegir que la ley facultaba a la actora a accionar civilmente en contra del imputado o en contra de personas diferentes del imputado, como es el caso del Fisco de Chile. En el presente caso y para lo que interesa a esta defensa, es que de acuerdo a la norma del artículo 59 del Código Procesal Penal inciso tercero, la víctima, en este caso, la actora Sra. Vargas, debió plantear su acción dentro del plazo de cuatro años en contra del Fisco, ante tribunal civil competente conforme a las reglas generales, lo que no hizo dentro del plazo legal que tenía para ello.

Indica que al revisar las normas generales y, entendiendo que estamos en presencia de un juicio especial en que se persigue la responsabilidad extracontractual del Fisco, y en este sentido, resulta aplicable el artículo 2497 del Código Civil que establece *“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”*. Teniendo presente dicha regla general y sin que exista al menos en el caso de marras excepción alguna, se debe relacionar la norma con la contenida en el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, que es claro en sostener que *cuando la existencia de un delito haya de ser fundamento preciso de una sentencia civil o tenga en ella influencia notoria, podrán los tribunales suspender el pronunciamiento de ésta hasta la terminación del proceso criminal, si en éste se ha deducido acusación o formulado requerimiento, según el caso*. Es así que, a la luz de este inciso, si la actora o su apoderado hubiera deducido acción civil en contra del FISCO DE CHILE, eventualmente se habría suspendido el proceso, en atención a que podría haber resultado necesario contar con la sentencia criminal que responsabilizara al agente de su actuar; sin embargo, no se ejerció acción alguna en contra de mi representado, con lo cual se produjo el efecto.



Alega que siendo la responsabilidad del FISCO meramente civil, y según las reglas generales, el plazo de cuatro años, la acción se encontraría prescrita, plazo que como se ha dicho se inicia con la perpetración del acto y se interrumpe con la notificación válida de la demanda, así como para otros, con su sola presentación, lo que nos lleva a concluir que en ambos casos y para efectos de esta causa, la acción se encuentra prescrita.

En cuanto a la Interrupción con notificación válida de la demanda, señala que dado que la demanda fue válidamente notificada a la demandada con fecha 7 de abril de 2022, esto es, habiendo transcurrido cuatro años y diez meses de acontecido el acto, el plazo de cuatro años se ha superado con creces y en consecuencia la acción se encuentra prescrita. Así se desprende del artículo 2503 del Código Civil, que es necesario para que opere la interrupción de la prescripción que la demanda sea válidamente notificada, lo que ha sido resuelto de esta forma reiteradamente por nuestro máximo tribunal.

Argumenta que, no obstante, que lo indicado precedentemente no resulta un punto pacífico, considera que el tema se encuentra resuelto a nivel legislativo, toda vez que se ha legislado para casos especiales, en que expresamente se señala que basta para que se produzca la interrupción de la prescripción, la sola presentación de la demanda, como es el caso de la Ley N° 17.322, que establece normas para la cobranza de cotizaciones previsionales, multas y aportes de las instituciones de seguridad social, cuerpo legal que en su artículo 18 dispone *“Los plazos de prescripción se consideraran interrumpidos en todo caso por la sola presentación de la demanda.”*. De igual forma la Ley N° 21.226 que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en la audiencias y actuaciones judiciales y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, todo esto causado por la pandemia del Covid- 19 y que dispone en su artículo 8, *“ Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, se entenderá interrumpida la prescripción de las acciones por la sola presentación de la demanda, bajo condición de que esta no sea declarada inadmisibile y que sea válidamente notificada dentro de los cincuenta días hábiles siguientes a la fecha del cese del referido estado de excepción constitucional, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, o dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que la demanda fuere proveída, lo que suceda último.”*

Refiere que queda en evidencia que la acción de indemnización deducida se encuentra prescrita. Es más, el abogado de las actoras, sabia o al



menos debía saber, el plazo con el que contaba para ejercer la acción civil, teniendo en consideración, además, que se desprende de los propios antecedentes aportados a la demanda, que la causa penal fue patrocinada por el mismo profesional y ésta fue resuelta el 11 de noviembre de 2019, tiempo suficiente para ejercer las acciones indemnizatorias que pretende con este libelo.

En relación a la Interrupción con la sola presentación de la demanda, indica que para el evento que el actor sea de la postura que la sola presentación de la demanda interrumpe la prescripción extintiva de la acción civil, deberá el tribunal tener presente que la demanda se tuvo por modificada con fecha 25 de enero de 2022, demanda que para todos los efectos legales y por disposición expresa del artículo 261 del Código de Procedimiento Civil, se entiende como una demanda nueva y respecto de la cual se ha trabado la litis de autos, demanda que a su vez fue notificada a esta parte con fecha 7 de abril del año en curso.

Por ello, expone, cualquiera que sea la postura del actor con relación al momento que se produce la interrupción de la prescripción extintiva de la acción judicial, en caso de ser la sola presentación de la demanda, esto aconteció igualmente una vez vencido el plazo de cuatro años y por ende ha operado la prescripción extintiva de la acción.

Agrega que según lo expuesto en la demanda, los hechos en que se funda la pretensión del actor ocurrieron el día 1º de junio de 2017. De acuerdo con ello, transcurrió en exceso el plazo de prescripción que establece el artículo 2332 del Código Civil, ya sea hasta la notificación de la demanda, efectuada el día 7 de abril de 2022 o bien, el 25 de enero del mismo año.

Argumenta que la responsabilidad del FISCO DE CHILE, respecto de los hechos por los cuales se le demanda, es absolutamente distinta, indirecta e independiente de la responsabilidad de los condenados, por lo que el actor debió perseguirla o recurrir dentro de los plazos legales, sin embargo, sólo recurre una vez que éstos se encuentran vencidos.

En subsidio de lo anterior, alega inexistencia de falta de servicio y existencia de una falta personal separable del mismo.

En cuanto a ello, expone que no es posible reconocer en los hechos que plantea la demanda, eventos de falta de servicio o falta personal que constituyan factores o reglas de imputación de la responsabilidad del Estado, considerados por la Ley 18.575 en su artículo 4 y 42, y artículo 38 inciso 2 de la Constitución Política del Estado. Nuestro actual sistema de responsabilidad



extracontractual del Estado posee una influencia ineludible de la tradición francesa.

Indica que, conforme lo ha establecido la jurisprudencia, existe falta de servicio cuando éste ha funcionado deficientemente, no ha funcionado debiendo hacerlo, o lo ha hecho en forma tardía. Si por esta falta de servicio se ocasiona un daño a un particular, la administración debe indemnizarlo. La falta personal, en cambio, es aquella separable del ejercicio de la función, ya sea por tratarse de hechos realizados por el funcionario fuera del ejercicio de sus funciones, por tratarse de actos que obedecen a móviles personales o cuando ha existido por parte de éste una grave imprudencia o negligencia.

Señala que existe una clara influencia del derecho francés en la materia, circunstancia que se denota por el hecho que nuestro legislador haya seguido una mera traducción de los conceptos franceses de “faute de service” y “faute personnelle”, incorporando estos conceptos en diversas normas de nuestro ordenamiento como el artículo 42 de la LOCBAE, el artículo 142 de la Ley de Municipalidades o el artículo 38 de la Ley AUGE. Bajo dicha concepción, podemos argumentar que, en la especie, no hay falta de servicio, porque no se configura ninguna de las hipótesis que doctrinaria y jurisprudencialmente la constituyen, siendo claro que la acción de Samuel Andrés Cerda Tapia es enteramente extraña a la estructura y funcionamiento de Carabineros de Chile.

Agrega que la evaluación de la conducta criminal protagonizada por Cerda Tapia, permite afirmar que tal hecho, más que una falta funcionaria -y de la que responde el Estado por cúmulo de responsabilidades -, existe lo que se denomina falta personal, que corresponde a una conducta criminal exclusivamente atribuible al funcionario y sin relación alguna con la organización pública y por ello imprevisible e inevitable para la Administración, aunque externamente acontezca durante la función y aparentemente esté ligada al servicio. Expresa que es evidente que las lesiones cometidas por Cerda Tapia, fueron resultado de su conducta dolosa, incumpliendo los protocolos que reglan su actuación por parte de la policía, que se concretaron en acciones del todo ajenas a la actividad que a éstos les correspondía desplegar como funcionario de Carabineros. Esas características del hecho, permiten concebir la natural separabilidad de ese comportamiento desquiciado con la función pública que debían prestar el autor del ilícito. Intelectualmente puede decirse que, al cometer los actos criminales, los sujetos ya no actúan como agentes públicos, porque se apartan o separan completamente de su carácter de funcionario.



Expone que la jurisprudencia no solo acepta que no hay responsabilidad del Estado cuando la falta tiene lugar fuera del lugar público, sino también cuando la falta es separable o no está ligada al servicio, intelectual o psicológicamente, porque el hecho antijurídico de ningún modo importa ejecución de función pública alguna, ni corresponde al servicio a cargo del autor de la conducta.

En tales circunstancias extremas, indica, además, el sujeto se comporta como un simple delincuente y, por una decisión suya, se aparta enteramente de su condición de funcionario (separabilidad intelectual). En apoyo de lo alegado precedentemente, señala que es un hecho probado, tanto por la vía judicial - penal como por la vía administrativa, que el Sr. Cerda actuó de un modo criminal y que Carabineros de Chile, ni aún con toda su autoridad, tuvo forma de prever o impedir, empleando el cuidado ordinario.

Alega que Carabineros de Chile tiene toda una suerte de reglamentos e instructivos que establecen los requisitos de empleo de la fuerza física, protocolos que fueron vulnerados abiertamente por Sr. Cerda, en que ninguno fue ponderado y utilizado. Como hemos explicado y argumentado latamente, Carabineros de Chile ha desplegado innumerables controles, con el preciso fin de evitar resultados como el sufrido por la víctima. Conforme se desprende de lo anterior, pese a los esfuerzos por parte Carabineros de Chile de evitar conductas como las verificadas, el Sr. Cerda Tapia actuó errada y groseramente, al lesionar a la víctima.

Indica que se trata de un comportamiento exagerado y desproporcionado, a la luz de los protocolos en el uso de la fuerza, que dispone Carabineros y que el condenado conocía, tratándose de ex funcionario policial, con entrenamiento y formación como tal. Todos ellos son factores que permiten afirmar que el actuar delictual de los funcionarios, no pudo ser previsto, de manera de impedir el resultado, por el resto del personal y las jefaturas, no obstante los protocolos adoptados por el Servicio para evitarlo.

Por ello, refiere, es posible apreciar, Carabineros de Chile ha confeccionado, directrices, reglamentos y protocolos, con el preciso fin de evitar el abuso por parte de sus funcionarios y, ni aún con toda su autoridad y diligencia, fue posible anticipar, prever o impedir su acaecimiento, razón por la cual es posible alegar la ausencia de falta de servicio y, la exoneración de responsabilidad civil del FISCO.

Aduce que la conducta desplegada por Cerda Tapia no constituye falta de servicio, ni tampoco falta personal de la cual deba responder el Estado, porque esa conducta es material, intelectual y psicológicamente separable. En lo



material, porque el comportamiento de dicho sujeto, no solamente es ajeno sino contradictorio, como se dijo, con la actividad o función asignada, amén de un apartamiento grosero de las directrices adoptadas por Carabineros de Chile y de los protocolos internos de dicho Servicio, que prohíbe los tormentos y aplicación de apremios. En lo intelectual, también la conducta es separable de la función, porque, al cometer el delito, el Sr. Cerda se apartó de su calidad de funcionario. En este caso, indica que se trata claramente de infracciones graves en el cumplimiento de los protocolos preestablecidos por la Institución de Carabineros, y que todo funcionario de la misma está obligado a cumplir y respetar, de tal manera que, en este caso concreto, el ex Carabinero fue condenado por el delito de tormentos o apremios ilegítimos.

Expresa que este grosero alejamiento de los protocolos acredita la separabilidad entre la responsabilidad del funcionario y la del Servicio y, por derivación, del Fisco demandado. El Derecho Francés, del cual -y como se señaló- el nuestro es receptorio, ha precisado que la falta personal que compromete el Estado es aquella que no puede separarse del servicio. La doctrina consagrada en el fallo denominado "*Pelletier*" pone énfasis en determinar si el acto cometido por el funcionario es o no separable de la función ejercida y, si lo es, es de competencia del juez común y responde solamente el funcionario.

Expresa que en conclusión, en el actual escenario jurisprudencial y doctrinario, existe en la especie una clara distinción entre falta de servicio (por la cual el Estado y sus órganos responden) y falta personal (que exonera al Estado de toda responsabilidad civil, siendo ésta única y exclusivamente del funcionario, producto de una separación tanto material como intelectual).

Agrega que la doctrina predominante en la materia, cuya fuente es precisamente el derecho francés (en el que se basa el derecho de responsabilidades extracontractuales relativas al Fisco), es enfática en que la regla general en nuestro derecho es que la Administración sólo responde por falta de servicio, no por falta personal y sólo responde por esta última de manera excepcional, cuando se dan supuestos de cúmulo de responsabilidades. Lo que, como indica, no es el caso de autos, donde la conducta de Cerda es completamente separable de la función que realizaban en Carabineros de Chile, ya que actuaron bajo su esfera personal, impulsados para cometer el delito por el cual fueron condenados.

Concluye estableciendo que en mérito de lo anterior, el Fisco de Chile no tiene responsabilidad civil derivada de las conductas desplegadas por



Samuel Cerda Tapia, por lo que debe rechazarse la demanda interpuesta en su contra.

Señala, en cuanto al daño moral, que aunque la evaluación del mismo no está contemplada en un texto legal expreso, los fallos judiciales en la materia han mantenido una cierta correspondencia entre ellos, lo que revela que se han aplicado principios de racionalidad y prudencia en la regulación de estas indemnizaciones.

Plantea que conceder indemnizaciones mayores a las otorgadas generalmente por los Tribunales de Justicia como reparación de daño moral, significaría violentar el principio constitucional de igualdad ante la ley. El tribunal deberá establecer la existencia de ese daño y los factores que tendrá en consideración para su fijación, debiendo primar la idea de justicia y de equidad, limitada por los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Expone que la razonabilidad, antítesis de arbitrariedad, impone al tribunal pautas que le impiden incurrir en excesos y contradicciones que afecten a la seguridad jurídica. La extensión de la reparación del daño moral debe guardar relación con nuestra realidad jurídica, social y económica. Asimismo, deberá considerar especialmente la prueba rendida en el proceso sobre la real entidad de los daños, puesto que no hay reglas que permitan presumirlo.

Indica que según lo establecido por doctrina, la capacidad económica del demandado no autoriza para aumentar la indemnización, así las víctimas de hechos ilícitos causados por personas de fortuna obtendrían, por daños semejantes, indemnizaciones superiores a las víctimas de daños iguales, causados por personas de menos fortuna. La aflicción y dolor deben compensarse con una suma razonable y prudente para lograr la finalidad de la indemnización, que no es la sanción ni el lucro, sino puramente satisfactiva. Ello con entera prescindencia de la fortuna del victimario o de quien responde por éste. En el caso del Estado, se afectaría el patrimonio público, siempre insuficiente para atender las necesidades públicas.

Arguye que, la gravedad del hecho causante del daño tampoco puede ser un factor para la evaluación prudente por la naturaleza meramente satisfactiva de la indemnización, en cuanto sólo procura atenuar, aminorar las consecuencias del daño sufrido. No es rigurosamente compensatoria, como la de daños patrimoniales o materiales. Ha dicho la Excm. Corte Suprema: *“Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”*



Por ello, indica que en el caso que se acceda en este punto, deberá acoger la petición subsidiaria de la demandada en el sentido de establecer un monto de acuerdo a los criterios reiterados sustentados por la Jurisprudencia y rebajar considerablemente el monto de la demanda a una cantidad equitativa y acorde con el mérito del proceso.

En relación a la prueba del daño moral, señala que la indemnización de perjuicios tiene por objeto reestablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, con el objeto de procurar dejarla en el mismo estado en que ella se encontraba antes del acto dañoso. La indemnización no debe, entonces, exceder del monto del perjuicio causado, puesto que si el equilibrio se rompe ahora en favor de la víctima constituirá para ésta una fuente de ganancia o lucro.

Por ello, expone que cuando se trata de la reparación de daños puramente patrimoniales, sea daño emergente, sea lucro cesante, la aplicación de estos principios no ofrece mayor dificultad, ya que la determinación de aquéllos puede hacerse con relativa precisión.

Expresa que no ocurre lo mismo con el daño puramente moral o extrapatrimonial, ya que la reparación pecuniaria no hace desaparecer el dolor ni tampoco compensa a la víctima en términos de dejarla en una situación parecida a aquella en que se encontraba antes de la comisión del hecho dañoso.

Agrega que si la indemnización del daño moral no tiene un carácter reparatorio, quiere decir que su función es otra. Está dirigida a dar a quien ha sufrido el daño sólo una satisfacción de reemplazo. Por tanto, la indemnización por daño moral es meramente satisfactiva y no reparatoria.

El tribunal debe establecer la existencia de ese daño y los factores que tendrá en vista para su fijación. Los principios a que debe ceñir su decisión deben apuntar a la idea de justicia, de equidad. Su potestad está acotada y limitada por los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Indica que el daño moral, al igual que todo otro daño, debe acreditarse por los medios legales de prueba que consagra nuestro ordenamiento jurídico.

Señala que tampoco puede el juez presumir el perjuicio moral, sin que la parte que lo alega le entregue los medios que lo acreditan. El juez no puede sentenciar extra proceso, sin violar el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, que obliga al órgano jurisdiccional a fallar conforme al mérito del proceso.

Luego, no es efectivo que la apreciación del daño moral tiene un carácter eminentemente subjetivo y que resulta autosuficiente per se, de modo



que no requiere de ningún antecedente objetivo para que se respalde su apreciación.

Agrega que por el contrario, no basta la afirmación deslizada por la demandante en el sentido de que el rubro correspondiente al daño moral no requiere de prueba, bastando para acreditarlo el considerar o suponer consecuencias lógicas o huellas dejadas de manera indeleble en la demandante, la razón de ello expresa, es simple: no existen en nuestro derecho normas especiales sobre la prueba del daño moral y, en consecuencia, rigen sin contrapeso las reglas generales.

Finalmente, debe tenerse presente que la jurisprudencia dictada por los tribunales de justicia en causas en las que no se ha acreditado la existencia y la entidad del daño moral, conforme a las normas probatorias procesales, ha sido reiterada al exigir la prueba real y efectiva de los acápites señalados para acceder a las peticiones de la demandante, cuyas pretensiones - al no estar debidamente acreditadas - han sido rechazadas.

En cuanto al monto de la indemnización demandada, interpone en subsidio, como alegación o defensa el alto monto de la indemnización demandada.

Se pretende por la contraria el pago de la suma de \$140.000.000 a título de daño moral.

Es así que la cantidad demandada no guarda relación alguna con la idea de compensar alguna pérdida, por grave y fundamental que ésta sea. Indica que es sorprendente la alta cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, en relación con los montos de indemnización que han sido fijados por los Tribunales para compensar daños similares a los de autos y teniendo en cuenta, además, la realidad económica de nuestro país. Es cierto que en esta materia la regulación queda entregada en definitiva, en caso de ser procedente la indemnización, al Tribunal. Pero, por una parte, el juez debe obrar con prudencia, como lo señalaba el profesor Alessandri, y por otra parte, las sentencias que se dicten avaluando el daño moral deben guardar cierta correspondencia unas con otras, e indudablemente los fallos anteriores que se hayan dictado en materia de daño moral constituyen un parámetro importante a considerar. Los montos fijados ordinariamente por los Tribunales por este concepto han sido significativamente menores; una indemnización concordante con esa jurisprudencia, de ser procedente, no debiera alcanzar ni siquiera a la centésima parte de la suma demandada.

En relación a la improcedencia de petición relativa a intereses, sobre las elevadas cifras que se demandan como indemnización, la parte demandante



pide también indebidamente de intereses, ello debido a que, es legalmente improcedente solicitar el pago y más aún que se llegue a ordenar pagar intereses atendida la naturaleza del juicio, pues éstos no constituyen otra cosa que indemnización moratoria o intereses moratorios y, como su nombre lo indica, persiguen únicamente resarcir los perjuicios derivados del retardo culpable o de la mora del deudor de una obligación de dinero y corren solamente desde que el deudor se constituye en mora. Tratándose de una obligación inexistente por ahora e ilíquida como la de autos, que se traduce en una obligación de indemnizar perjuicios cuya existencia y monto sólo se determinan en la sentencia de término, el demandado no cae en mora sino después que la sentencia se encuentra ejecutoriada y se le requiere judicialmente su cumplimiento. Así lo disponen los artículos 1.557 y 1.559 del Código Civil.

Solicita en definitiva acoger las excepciones y alegaciones o defensas opuestas, negar lugar a ella en todos sus partes, con costas; en subsidio de lo anterior, y para el muy improbable evento que ella sea acogida, condenar al FISCO DE CHILE al pago de las sumas cuya existencia legalmente se pruebe como daño emergente y moral en montos que fueren debidamente acreditados, que guarden relación con los hechos y en cuanto al daño moral que guarde relación con los determinados por la jurisprudencia y que sean acordes a la realidad económica nacional y que no supere el monto de \$ 3.000.0000; asimismo, y para el caso de condenar al FISCO DE CHILE al pago de intereses, declarar que éstos sólo se pagarán, en todo caso, desde la fecha en que se constituya en mora el deudor.

Con fecha 03 de mayo de 2022, la parte demandada evacua el trámite de la réplica e indica que en primer lugar, en cuanto la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile, que no concurren los presupuestos legales para declararla como lo solicita la contraria. En efecto, indica que la demanda de autos fue interpuesta con fecha 26 de Mayo de 2021, vale decir antes de que se hayan cumplido los cuatro años desde la ocurrencia del hecho que origina la responsabilidad extracontractual del Fisco de Chile conforme se expone en el líbelo de demanda.

Refiere que en la causa de autos, se debe aplicar lo dispuesto en el **artículo 8 de la ley 21.226** que expresamente señala que se interrumpe la prescripción de las acciones civiles con la sola interposición de la demanda, siempre que se notifique la misma dentro de los 50 días hábiles siguientes a la fecha de término del estado de excepción constitucional, cuestión que ocurrió el 30 de Noviembre de 2021 según lo dispuesto en la ley 21.379.



Expresa que se podrá apreciar que la demanda de autos fue notificada válidamente al Fisco de Chile el día 24 de Enero de 2022, vale decir fue notificada al día 44 hábiles luego del término del estado de excepción constitucional, de modo que se produjo plenamente el efecto señalado en el referido artículo 8 de la ley 21.226, en cuanto debe entenderse que efectivamente se interrumpió la prescripción de la acción civil el 26 de Mayo de 2021.

Agrega que la interrupción de la prescripción de la acción civil conforme se ha expuesto no se ve afectada en ningún caso por el hecho de que esta parte haya corregido la demanda de acuerdo al artículo 261 del Código de Procedimiento Civil, pues aquello no está contemplado en la legislación de excepción contenida en las leyes 21.226 y 21.379, ni tampoco en el referido artículo 261 del Código de Procedimiento Civil. Cuando esta última disposición legal se refiere a que la demanda corregida se considera una nueva demanda para los efectos de su notificación, sólo quiere decir que debe notificarse nuevamente y que aquella notificación debe ser personal.

Indica que si se estima que atendido el hecho de que en estos autos se anuló todo lo obrado y fue necesario notificar nuevamente la demanda de autos, ahora siguiendo el procedimiento correspondiente a un juicio de hacienda y ya no un juicio sumario, y aquello pudiera hacer variar la conclusión anteriormente expuesta en cuanto a la interrupción de la acción civil, de todas formas no concurren los presupuestos legales para declarar la prescripción pues en ese caso debemos aplicar lo dispuesto en el mismo artículo 8 de la ley 21.226, en la parte que se refiere a la interrupción de la acción civil con la sola interposición de la demanda y su notificación dentro de los 30 días hábiles siguientes a que sea proveída, entendiendo en tal caso como resolución que provee la demanda aquella de fecha 09 de Marzo de 2022, que confirió traslado, la cual fue notificada al Fisco de Chile el 07 de Abril recién pasado, vale decir, al día hábil 25 de ser proveída.

Con fecha 11 de mayo de 2022, la parte demandada evacuó el trámite de la dúplica, fundamentada en que la demanda originalmente fue presentada el 26 de mayo de 2021, como sostiene el Sr. Mayne, también es cierto que dicha demanda fue rectificada el 28 de enero de 2022, entendiéndose por disposición expresa del artículo 261 del Código de Procedimiento Civil como una demanda nueva que debe ser notificada.

Es por ello, indica, que la demanda en la presente causa, es de fecha 28 de enero de 2022, esto es, demanda que para todos los efectos legales, se habría presentado ya concluido el plazo de prescripción de cuatro años, plazo



que se debe contabilizar desde el 1º de junio de 2017, es decir, transcurrido cuatro años y siete meses de ocurridos los hechos y además, una vez terminado el estado de excepción constitucional. Esto último, razón suficiente, para que en el presente caso no resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 21.226, en consecuencia, la sola presentación de la demanda no es suficiente para interrumpir la prescripción.

a Arguye que, si el Sr. Mayne insiste con la idea que la demanda en esta causa sería la presentada el 26 de mayo de 2021 y no la nueva de fecha 28 de enero de 2022., es dable concluir que, la demanda se presentó antes de cumplirse los cuatro años, estando vigente el estado de excepción y su sola presentación habría interrumpido la prescripción conforme lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley N° 21.226. No obstante, expresa, esta disposición es categórica al establecer como condición para que ello ocurra, que la demanda sea notificada dentro de un plazo fatal de 50 días hábiles a contar del término del estado de excepción constitucional, lo que aconteció el 30 de noviembre de 2021. Por tanto, habiéndose practicado la notificación de la demanda con fecha 7 de abril de 2022, no se encontraría cumplida la condición y la notificación resulta ser del todo extemporánea, ya que habrían excedido con creces el término de 50 días desde el término del estado de excepción, condición sine qua non para que opere la interrupción de la prescripción, con la sola presentación de la demanda.

b Por ello, indica que si se entiende que la demanda fue presentada el 26 de mayo de 2021, esto es, antes de vencer los cuatro años de acaecidos los hechos, ésta fue notificada válidamente de acuerdo al artículo 261 del Código de Procedimiento Civil, vencido los 50 días hábiles exigidos por el art. 8 de la Ley N°21.226, condición necesaria para interrumpir el plazo de prescripción; y de lo contrario, si se entiende que la demanda de autos es la presentada el 28 de enero de 2022 (demanda nueva), en este último caso fue presentada y notificada habiendo vencido con creces el plazo de prescripción de cuatro años, razón suficiente para que la acción se declare prescrita y la demanda sea rechazada de plano.

Con fecha 24 de mayo de 2022, se recibió la causa a prueba siendo repuesta con fecha 12 de diciembre del mismo año, rindiéndose finalmente la prueba que consta en autos.

Con fecha 27 de junio de 2023, se citó a las partes a oír sentencia.

Con fecha 21 de agosto de 2023 se decretaron medidas para mejor resolver, reingresando los autos para fallo el **26 de septiembre del mismo año.**



CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la tacha de testigos:

En cuanto a la tacha de testigo formulada en audiencia de fecha 20 de diciembre de 2023:

PRIMERO: Que, la demandada, con fecha 21 de febrero de 2023 tachó al testigo don Juan Pablo Galdames Ávalos, cuyas declaraciones constan a folio 76 por la causal del artículo 358 N° 6 y 7 del Código de Procedimiento Civil, ello porque el propio testigo afirma que relación íntima con la parte que lo presenta declarar y eso constituye una causal de amistad evidente por lo tanto un interés también indiciario al menos impotente respecto a los motivos por los que se presenta a declarar.

SEGUNDO: Que, la parte demandada evacuando el traslado conferido, solicita el total y más absoluto rechazo a la tacha interpuesta, en atención a que, no existe una imparcialidad por el hecho de haber presenciado o estar presente en los hechos con un vínculos que en aquella oportunidad pero en la actualidad por lo mismo no tiene interés en el juicio si no solo vino a declarar por lo que presencio aquel día tampoco hay antecedentes de una amistad manifestada por un hecho grave y que podemos poner de buena manera este echo la imparcialidad del testigo todo refiere a hechos que hace más o menos de 6 años vinculo al testigo con la demandante pero nada se ha dicho respecto que ellos se hayan mantenido

TERCERO: Que el artículo 358 N° 7 del Código de Procedimiento Civil establece que son inhábiles para declarar, los que tengan “íntima amistad con la persona que los presenta” y en relación a ello el Tribunal considera que no se configura la causal invocada, toda vez que de los propios dichos del deponente se desprende que tuvieron “una especie de pololeo” en la época cuando sucedieron los hechos, más no en la actualidad, sin haberse demostrado la existencia de un vínculo íntimo de amistad del testigo con las actoras, respecto de las cuales no ha establecido el grado de intimidad que exige la hipótesis planteada por el legislador, debiendo en consecuencia, **rechazarse la misma**.

En relación a la tacha contemplada en el numeral 6 del artículo 358 del cuerpo legal ya citado, tal y como ha resuelto sostenidamente la jurisprudencia, el interés a que alude la norma debe tener carácter patrimonial, no configurándose por la eventual intención del testigo de defender o explicar los hechos relatados por las demandantes a través de su interposición de la demanda, ya que de ello no puede ni siquiera presumirse, añadiéndose a ello, la circunstancia de que al acoger la tacha, le impediría a éste tribunal tener acceso a la declaración de un testigo presencial que conoció de los hechos de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JVVLMXPWBX

autos de manera directa, privando a esta magistratura de un importante medio de prueba, y no constando que el testigo carezca de la imparcialidad necesaria para prestar testimonio en juicio, razones suficientes para **rechazar** igualmente, la tacha planteada en este sentido.

II.- En cuanto al fondo

CUARTO: Que doña Aleksandra Katarina Rendic Vargas y doña Cecilia Mireya Vargas Estay, **representadas** por su abogado don Jorge Mayne Moller han deducido demanda de indemnización de perjuicios en juicio de hacienda, en contra del **Fisco de Chile**, en virtud de los fundamentos ya debidamente pormenorizados en la parte expositiva de esta sentencia.

QUINTO: Que la parte demandada, contestando la demanda, solicita el rechazo de la misma, atendidos los argumentos esgrimidos en los vistos de esta sentencia.

SEXTO: Que a fin de acreditar los fundamentos de su demanda, la parte demandante rindió la siguiente prueba, consistente en:

DOCUMENTAL:

1.- Querella presentada por Instituto Nacional de Derechos Humanos en contra de Samuel Cerda Tapia en Sentencia definitiva segunda instancia dictada por la Itma. Corte de Apelaciones de Antcausa RIT 7556-2017 del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

2.- Acusación presentada por el Ministerio Público en contra de Samuel Cerda Tapia en causa RIT 7556-2017 del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

3.- Acta de audiencia en que se discutió procedimiento abreviado en contra de Samuel Cerda Tapia en causa RIT 7556-2017 del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

4.- Transcripción sentencia definitiva dictada en procedimiento abreviado en contra de Samuel Cerda Tapia en causa RIT 7556-2017 del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

5.- Sentencia definitiva de segunda instancia dictada por la Itma. Corte de Apelaciones de Antofagasta en causa seguida en contra de Samuel Cerda Tapia.

6.- Cúmplase de la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por la Itma. Corte de Apelaciones de Antofagasta en causa seguida en contra de Samuel Cerda Tapia.

7.- Requerimiento en Procedimiento Monitorio presentado por el Ministerio Público en contra de Aleksandra Rendic y otros en causa RIT 9442-2017 del Juzgado de Garantía de Antofagasta.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JVVLMXPWBX

8.- Resolución que acoge requerimiento en procedimiento monitorio presentado por el Ministerio Público en contra de Aleksandra Rendic y otros en causa RIT 9442-2017 del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

9.- Reclamo presentado por Aleksandra Rendic y otro en contra de resolución que acogió requerimiento monitorio en causa RIT 9442-2017 del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

10.- Acta de audiencia en que Ministerio Público comunica aplicación del principio de oportunidad en causa RIT 9442-2017 del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

11.- Peritaje psicológico aplicado a Aleksandra Rendic con fecha 25 de junio 2018 por profesional del Servicio Médico Legal a requerimiento de la Fiscalía Local de Antofagasta.

12.- Informe de lesiones sufridas por Aleksandra Rendic, elaborado por profesional del Servicio Médico Legal a requerimiento de la Fiscalía Local de Antofagasta, con fecha 06 de diciembre de 2017.

13.- Copia de declaración prestada por el carabinero Emanuel Gajardo ante funcionario de la Policía de Investigaciones a requerimiento de la Fiscalía Local de Antofagasta.

14.- Copia de los antecedentes de la carpeta de investigación llevada por la Fiscalía Local de Antofagasta en contra de Samuel Cerda Tapia por el delito de apremios ilegítimos cometido en contra de Aleksandra Rendic.

15.- Dos fotos de la detención de Aleksandra Rendic por Samuel Cerda Tapia el 01 de junio de 2017.

16.- Dos hojas con un total de seis fotos de Aleksandra Rendic, de su pierna y de cuerpo entero.

17.- Circular 1756 de 2013 sobre uso de la fuerza por Carabineros de Chile.

18.- Circular 1832 de 2019 sobre uso de la fuerza por Carabineros de Chile.

19.- Dato de Atención de Urgencia de Aleksandra Rendic en Centro Asistencial Norte de fecha 01 de junio de 2017.

20.- Certificado Dr. Venegas de fecha 02 junio 2017.

21.- Informe médico resonancia rodilla de fecha 05 de junio 2017.

22.- Epicrisis Hospital Militar del Norte de fecha 13 de junio de 2017.

23.- Certificado Dr. Avendaño de fecha 31 julio 2017.

24.- Informe médico radiografía tobillo de fecha 31 de julio 2017.

25.- Informe médico radiografía pierna de fecha 31 de agosto 2017.

26.- Epicrisis Hospital del Trabajador de fecha 07 de marzo de 2018.



27.- Certificado Dr. García de fecha 25 de Abril de 2018.

28.- Copia denuncia de Aleksandra Rendic en Fiscalía.

29.- Declaración de Aleksandra Rendic en Fiscalía.

II.- Exhibición de documentos: La cual consta a folio 71 de fecha 01 febrero de 2023, en la cual se exhibieron los siguientes documentos:

1. Orden General N° 2287, de fecha 14.08.2014, que aprueba actualización de protocolos de intervención para el mantenimiento del orden público.

2. Orden General N° 2125, de fecha 02.10.2012, que aprueba manual de operaciones para el control del orden público.

3. Circular N° 1756, de fecha 13.03.2013, que imparte instrucciones sobre uso de la fuerza.

III.- Testimonial:

Condujo a doña **Juan Pablo Galdames Ávalos**, quien con fecha 21 de febrero de 2023, según da cuenta el acta de folio 76, declaró conforme al siguiente tenor:

PRESTA DECLARACIÓN AL PUNTO 1.

Efectividad que el día 01 de junio del 2017 aproximadamente a las 18:00 horas, en circunstancias que doña Aleksandra Katarina Rendic Vargas caminaba junto a don Juan Pablo Galdames por calle Ricaventura, de esta ciudad, funcionarios de Carabineros de Chile, tras solicitarles sus cédulas de identidad y revisar sus pertenencias, procedieron a detenerlos mediante el empleo de la fuerza, generando lesiones en la pierna izquierda de la actora Rendic Vargas. En la afirmativa, época, lugar, antecedentes y demás circunstancias.

R: Carabinero procedió a hacernos un control de identidad luego le hirieron la pierna a Alexandra

REPREGUNTAS.

1.- Para que diga el testigo, a que se refiere con que fue una intercepción violenta respecto de carabineros

R: Porque en la segunda revisión de nuestras pertenencias tuvieron una actitud agresiva más con Alexandra nos quisieron encontrar algo a la fuerza y empezaron a debatir

2.- Para que diga el testigo, Además del control de identidad qué más hizo carabineros

R: En la segunda revisión carabineros empezó a forcejear con Alexandra haciéndole una llave y tirándola al suelo haciéndole una fractura en la pierna izquierda mientras que a mí 2 carabineros me estaban intentando hacer una llave para sujetarme.



3.- Para que diga el testigo, cómo sabe usted que se hizo una fractura en la pierna izquierda de la señorita Alexandra.

R: Los supuse por el dolor que ella se quejaba en la pierna y por la forma que le hicieron la llave y cómo Alexandra le pidió al carabinero que saliera encima de ella Por qué era tremendo el dolor en la pierna

4.- Para que diga el testigo, después de los hechos relatados qué hizo carabineros.

R: Pidieron refuerzos y nos esposaron y nos metieron al furgón.

5.-Para que diga el testigo, dónde los llevaron después de ingresarlos al furgón.

R: Después de meternos al furgón en fui vamos a un condominio según lo que escuché en ese instante y por las repetidas quejas de Alexandra por su pierna nos fuimos al hospital CAN

6.- Para que diga el testigo, después de todo lo que pasó pudo comprobar la fractura de La señorita Alexandra.

R: Luego de estar en la consulta del CAN ya que en esas circunstancias carabineros tenía que rectificar aquello A nosotros nos hicieron un control de fracturas por la respuesta de Alexandra

7.-Para que diga el testigo, tiene conocimiento del proceso de recuperación de las Lesiones de Alexandra

R: He tenido conocimiento por las redes sociales vía Facebook hoy vi gracias a las publicaciones eh todo el proceso que tuvo que pasar como operaciones y gracias a ello me he mantenido al tanto.

8.- Para que diga el testigo, si tiene conocimiento en aquella etapa de recuperación de la señorita Alexandra Rendic ella tenía algún ingreso algún trabajo remunerado.

R: No lo tengo claro.

PRESTA DECLARACIÓN AL PUNTO NÚMERO 2

Efectividad que como consecuencia de los hechos señalados en el punto N°1, las demandantes sufrieron daño moral y la demandante doña Cecilia Mireya Vargas Estay, además, sufrió daño emergente. En la afirmativa, relación de causalidad, naturaleza, antecedentes y montos

R: Respecto a eso Alexandra si tuvo un daño moral y un daño psicológico por la circunstancias del momento también en la recuperación me acuerdo que en ese momento no podía ni caminar.

REPREGUNTAS

1.- Para que diga el testigo, ya que usted Señala que la señorita Alexandra tenía lesiones cómo se desplazaba.



R: Silla de ruedas.

2.- Para que diga el testigo, Cómo usted sabía que se desplazaba en silla de ruedas si según usted decía que después de lo sucedido no tuvo mucho contacto.

R: El día siguiente después de lo sucedido fui a rectificar cómo estaba ella y estaba en silla de ruedas

Condujo a doña **Constanza Danae Olmos Flores** cedula, quien con fecha según da cuenta el acta de folio 76, declaró conforme al siguiente tenor:

PRESTA DECLARACIÓN AL PUNTO NÚMERO 1

Efectividad que el día 01 de junio del 2017 aproximadamente a las 18:00 horas, en circunstancias que doña Aleksandra Katarina Rendic Vargas caminaba junto a don Juan Pablo Galdames por calle Ricaventura, de esta ciudad, funcionarios de Carabineros de Chile, tras solicitarles sus cédulas de identidad y revisar sus pertenencias, procedieron a detenerlos mediante el empleo de la fuerza, generando lesiones en la pierna izquierda de la actora Rendic Vargas. En la afirmativa, época, lugar, antecedentes y demás circunstancias.

R: *Bueno después de eso yo manejo la misma información Me quedé un rato en la comisaría esperando a que ellos salieran Y ahí después la espero su mamá Hasta ahí llegó mi participación obviamente que Después a los días a la semana fui preguntando por ella Para saber cómo estaba y hasta le facilité una silla de ruedas que en ese tiempo le pertenecía a mi bisabuela y traté de apoyarla en lo que podía en ese momento*

REPREGUNTAS

1.- Para que diga el testigo, Hasta qué momento estuvo en la comisaría que pudo presenciar ahí

R: *En ese momento bueno había mucho caos ese día en la comisaría como lo mencioné anteriormente siempre traté de pedir información antes que llegara a su mamá por parte de carabineros no me entregaron ninguna información Luego de eso yo siempre escuchaba la voz de fondo de Alexandra cómo gritaba porque le dolía su pierna que por favor le dolía que por favor le llegaron una silla de ruedas y se quedaron más menos hasta ahí hasta las 11 de la noche aprox hasta que los soltaron y salió saltando en una pierna su short su calza estaba rota con un yeso en el pie y saltando en todo momento y Juan Pablo salió todo destartado eh como desordenado sin cordones .*

2.- Para que diga el testigo, Sí sabe lesiones que sufrió doña Alexandra



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JVVLMXPWBX

R: Si las conozco tuvo una fractura costilla o peroné y una fractura en la pierna y a raíz de eso se dieron cuenta que tenía una lesión en la rodilla y se opera tanto de la rodilla y la pierna incluso cuando la operaron de su pierna la tenía llena de corchetes esa fue su primera operación porque creo que la otra se la hizo en otra ciudad y como dije le preste la silla de mi bisabuela y todo lo demás creo que nunca había visto una persona tan vulnerable que se quejara de tanto dolor como la vi a ella como dije era compañera de colegio y nunca la había visto llorando pero esa vez cuando la fui a visitar y a llevarle la silla fue súper chocante ver su estado

3.- Para que diga el testigo, si sabe o tiene conocimiento como se produjeron esas lesiones

R: Vi los videos que Alexandra me mostro en su oportunidad donde sale carabineros. Ella me conto que iba adonde su casa después del control de identidad que le hicieron y carabinero la toma como ella ya estaba yendo la tomo detrás del brazo la botaron al suelo cae y cae obviamente con su peso el tema de pierna y rodilla y en el video claramente se ve que carabinero sale encima de ella esta con su rodilla sobre ella y ella a cada rato gritando y quejándose me duele la pierna sale de ahí por favor sale me duele y había mucha gente alrededor también es mujer porque le haces eso.

4.- Para que diga el testigo, a la época de los hechos la señora Alexandra Rendic tenía alguna actividad remunerada

R: No se

5.-Para que diga el testigo, si tiene conocimiento quien financio el proceso de recuperación de las lesiones de la señora Alexandra

R: Su papa y su mama

6.- Para que diga el testigo, que efectos sufrieron en la señorita Rendic estas lesiones consecuencia

R: Como comenté tan íntima no somos pero en los transcurso de los años me he dado cuenta que siempre se queja del dolor de su pierna hace poquito vi sus redes sociales siempre tiene un dolor constante en su pierna y sobre todo cuando es invierno asumo que es por los tornillos o pernos que tiene respecto a la operación y eso obviamente va acumulando daño psicológico siempre esta bajoneada cuando se entera de esa tema y en ese momento incluso bueno yo hice mi vida me case tuve un hijo y todo ella tuvo una asistente emocional que es su perra y ella era la que le daba todo su motivación que se parara y hiciera actividad y que asistiera a sus controles y fue todo un tema psicológico hasta el día de hoy que yo puedo apreciar



7.-Para que diga el testigo, si pudo percibir de qué manera se afectó la madre de la señora Alexandra por motivos de esta circunstancia

R: Si, cuando iba a visitarla converse también con su madre y me manifestó que postergo su jubilación por los gastos a los que tuvo que recurrir Alexandra

8.- Para que diga el testigo, si conoce el nombre de la madre de Alexandra

R: Cecilia Vargas

9.- Para que diga el testigo, como es posible que declara no ser amiga íntima de la demandante en circunstancia en el que en el tenor de sus declaraciones queda constancia que fue la primera persona a la que la demandante llamo pidiendo auxilio, la visitaba y entrego la silla de ruedas de la abuela a la demandante para movilizarse.

R: No fui la primera persona a la que llamé, como su madre no le contestaba me llamo a mí y yo llamé a una amiga de ella para que me entregara el contacto de su mamá, iba de manera esporádica cuando podía y no frecuentemente y cuando vi la situación que pasaba ofrecí la silla de mi bisabuela que había fallecido y cuando termino me la devolvieron.

PRESTA DECLARACIÓN AL PUNTO NÚMERO 2

Efectividad que como consecuencia de los hechos señalados en el punto N°1, las demandantes sufrieron daño moral y la demandante doña Cecilia Mireya Vargas Estay, además, sufrió daño emergente. En la afirmativa, relación de causalidad, naturaleza, antecedentes y montos.

R: Como comenté la mama de Alexandra me comento que tuvo que aplazar la jubilación por los costos para pagar el tratamiento de su hija.

REPEGUNTAS

1.-Para que diga el testigo, si tiene conocimiento del daño moral que tuvieron ambas demandantes.

R: Cuando la visitaba había momentos que estaba vulnerable, me lloraba, porque igual estaba en una situación de estrés psicológico en todo sentido en el que le faltaba el respeto, le gritaba, no quería nada mas con la vida y no sabia que más hacer con su hija ya que descargaba todo su enojo con su madre. Hasta el día de hoy incluso en redes sociales el hecho de que todo esto le afecto psicológicamente, era una persona super vulnerable, no quería nada con su vida, trataba de darle todo mi ánimo, pero todo el dolor era mucho en su mente y hasta el día de hoy y los inviernos lo pasa súper mal.

SÉPTIMO: Que la parte demandada no allegó prueba de ninguna especie.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JVVXMXPWBX

III.- En cuanto a la excepción de prescripción alegada por el apoderado del Fisco de Chile en su contestación a la demanda:

OCTAVO: Que, el Fisco de Chile opuso en su contestación a la demanda la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual intentada en su contra por las actoras, fundando la misma en la circunstancia que los hechos que motivan el libelo pretensor acaecieron el 01 de junio de 2017, por lo que a la época en que le fue notificado del mismo, esto es, al 07 de abril de 2022 ya había transcurrido con creces el término de 4 años contemplado en el artículo 2332 del Código Civil, agregando que el instituto de la prescripción tiene alcance general por lo que le es aplicable a su parte, aun cuando de acuerdo al artículo 547 del mismo cuerpo de leyes se rija por reglamentos y leyes especiales, ello por aplicación del artículo 2497 del mismo Código, al señalar “las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las Iglesias, de las Municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”, de lo que fluye no existen razones para sostener la pretendida imprescriptibilidad alegada en la demanda, más aún que la prescripción debe ser alegada, ya que no está permitido renunciarla anticipadamente conforme al artículo 2494 del Código citado, haciendo presente que lo que se reclama en autos es el resarcimiento de un perjuicio, que persigue reponer en el patrimonio dañado, el menoscabo sufrido.

Refiere que la prescripción resguarda un valor fundamental para el desenvolvimiento de la sociedad, seguridad y la certeza jurídica, alegando que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere de una declaración explícita, lo que en el presente caso no existe, por lo que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras, citando al efecto los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, de lo que se desprende que la Carta Fundamental en materia de actuaciones de los Órganos del estado, se remite a las normas legales correspondientes que regulan el resarcimiento del daño y que son indudablemente las normas generales del Código Civil. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema e ltma. Corte de Apelaciones de Santiago que demostraría la plena aplicación de la prescripción común al derecho público y administrativo.

En capítulo aparte, sostiene que en el caso de marras no ha operado la interrupción de la prescripción en los términos del artículo 60 en relación con los



artículos 261 y 61, todos del Código Procesal Penal, los que transcribe, adicionando que de los antecedentes contenidos en la causa penal sustanciada a raíz de los hechos en que las actoras fundan su demanda, **RIT 7556-2017 RUC 1710027052-8** del Juzgado de Garantía de esta ciudad, que de manifiesto que éstas no prepararon la demanda civil que hoy interponen en contra el Fisco de Chile, razón por la cual ha operado a su respecto la sanción legal prevista en el artículo 61 inciso 3° del Código reseñado, es decir, la prescripción extintiva de la acción civil ha operado a su respecto, toda vez que ésta, como modo de extinguir derechos y acciones, no puede considerarse interrumpida.

Concluye manifestando que de la interpretación armónica de las normas antes citadas, queda de manifiesto en el caso sub judice ha operado de pleno derecho la sanción legal de la prescripción extintiva de la acción por no haberse ejercido ella en la oportunidad legal claramente determinada en las normas referidas en el Código Procesal Penal, en particular en su artículo 61 inciso 3°.

NOVENO: Que, **la prescripción extintiva** es un modo de extinguir los derechos y acciones ajenos, por no haberlos ejercido el acreedor o el titular de ellos durante cierto lapso, concurriendo los demás requisitos legales.

Sobre el particular, el **inciso 1° del artículo 2492 del Código Civil**, dispone que la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales.

Por otro lado, el **artículo 2514** del mismo cuerpo legal, expresa que *la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible.*

Además, el **artículo 2515** del Código del ramo, expresa que este tiempo es en general de tres años para las acciones ejecutivas y de cinco años para las ordinarias.

Sin perjuicio de lo anterior, conforme a la normativa citada en la demanda y de acuerdo a lo manifestado en ella, la acción interpuesta en autos corresponde a la de la responsabilidad extracontractual, la que se encuentra reglamentada en el Código Civil en su Libro IV, Título XXXV de los Delitos y Cuasidelitos entre los artículos 2314 y siguientes, debiendo agregarse que sobre el particular, el artículo 2332 del referido Código, establece que **“Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto”**.



III.- a) En cuanto a la prescripción de la acción

DÉCIMO: Que dilucidado lo anterior, se ha planteado controversia entre los litigantes de este proceso, acerca de si la acción de indemnización de perjuicios, por responsabilidad extracontractual, se encontraría prescrita por haber transcurrido el lapso especial de cuatro años a que se refiere el artículo 2332 del Código Civil, esto es, que desde la ocurrencia del hecho a la época en que se notificó válidamente la dda al Fisco de Chile, dicho término se encontraba extinguido por el transcurso del plazo señalado por la norma.

Asimismo, se genera debate, en lo que respecta a si dicho modo de extinguir acciones, se interrumpió o no, como consecuencia de ser aplicable en la especie la situación excepcional reglamentada por el artículo 8 de la Ley 21.226, y en definitiva, si la sola presentación de la presente demanda, interrumpió el cómputo del plazo de prescripción de la acción resarcitoria de marras, por estimarse por el demandante que, en el presente caso, se dan copulativamente, los requisitos exigidos por el artículo 8 precitado, lo que traería como consecuencia, que el arbitrio civil intentado en esta sede no habría prescrito.

UNDECIMO: que, conforme a lo razonado en el motivo previo, indispensable se hace analizar como primera cuestión, que el artículo 2332 del Código de Bello, se encarga de consagrar la prescriptibilidad de la acción indemnizatoria proveniente de un ilícito civil, exigiendo que la misma, sea intentada dentro de un plazo acotado de cuatro años, estableciendo como punto de partida de su cómputo, la fecha o época de perpetración del acto generador del daño.

Siguiendo con esta línea argumentativa, cabe reiterar que el suceso fáctico generador del daño que justifica la pretensión indemnizatoria de la actora, conforme quedó establecido en la sentencia definitiva ejecutoriada dictada por el Tribunal de Garantía, ocurrió el **día 01 de junio de 2017**, resultando ser ilustrativo transcribir de la causa penal citada RIT 0-7556-2017, los hechos por los cuales el ministerio público, formuló acusación en contra del funcionario policial, causante de las lesiones en la actora de estos autos – hechos respecto de los cuales, no existe controversia entre las partes-. Siendo estos los siguientes:

“El día 01 de junio de 2017, a eso de las 18:00 horas aproximadamente, el imputado SAMUEL ANDRES CERDA TAPIA, ya individualizado, en su calidad de Carabinero realizaba un control de identidad junto a otro funcionario de Carabineros, a personas que se encontraban en un parque existente en la calle Ricaventura con Oficina Petronila de esta ciudad,



situación que fue observada por la víctima ALEKSANDRA KATARINA RENDIC VARGAS, quien comenzó a grabar dicho procedimiento con su teléfono celular, acto seguido, el imputado junto al otro funcionario se dirigen al lugar donde se encontraba la víctima quien estaba acompañada por su pololo. Luego, los funcionarios les realizan un control de identidad, procediendo a registrarlos, generándose un altercado con el pololo de la víctima ante su negativa de hacer entrega de su billetera, lo que provoca que la víctima tome los documentos de su pololo y comience a caminar en dirección a su domicilio, que se encontraba a poca distancia, en ese momento, el imputado la sigue y cuando la alcanza, abusando de su cargo y funciones, por la espalda, la toma desde atrás por el cuello y el brazo derecho, dándole una vuelta y aplicándole de forma injustificada, desproporcionada y deliberada una llave en la pierna izquierda, lo que provocó que cayera bruscamente al suelo, percatándose la víctima de inmediato que se había lesionado su pierna, por el fuerte dolor que de inmediato empezó a sentir, solicitándole al funcionario ayuda, el que lejos de asistirle, la privó de libertad y esposó, sentándose sobre ella, agravando intencionalmente la lesión sufrida para luego subirla a la fuerza al carro policial, pese a que no podía caminar, dándose cuenta que le habían roto la pierna. A raíz de este hecho, la víctima resultó con una fractura distal de peroné izquierdo y en rodilla izquierda, rotura del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento colateral medial, rotura parcial del ligamento colateral lateral y rotura parcial de la capsula articular, lesiones de carácter Grave, según informe de lesiones N° 344/2017 del SML.”

DÉCIMO SEGUNDO: Que, otra cuestión relevante es dejar asentado que luego de ocurrido el hecho ilícito de marras, tal como quedó establecido de manera previa, atendidas las circunstancias que el mismo era constitutivo, por otro lado, de una figura del tipo penal, y durante el transcurso del cómputo de plazo de prescripción a que se refiere el artículo 2332, y citado, se inició por parte del ente persecutor investigación criminal en contra del funcionario de Carabineros causante de las lesiones sufridas por la demandante, de manera tal que, para el efecto de despejar si la acción civil intentada en esta sede se interrumpió o no, en el proceso penal, en los términos del Código del Ramo, deberá analizarse las normas que sobre esta materia contempla dicho cuerpo normativo.

Para ello se debe dejar claramente asentado que el legislador, en el Código Procesal Penal, reglamentó de manera expresa los casos en que se interrumpía el curso del plazo de prescripción de la acción civil en el proceso penal, para lo cual deben analizarse sus artículos 59 y siguientes, normas que



establecen qué acciones civiles pueden hacerse valer en el proceso penal por las víctimas, estableciendo reglas especiales en lo referente a la interrupción de la prescripción.

El **artículo 59 de dicho Código** establece un principio general en cuanto a estas acciones, al señalar que *“La acción civil que tuviere por objeto únicamente la restitución de la cosa, deberá interponerse siempre durante el respectivo procedimiento penal, de conformidad a lo previsto en el artículo 189.*

Asimismo, durante la tramitación del procedimiento penal la víctima podrá deducir respecto del imputado, con arreglo a las prescripciones de este Código, todas las restantes acciones que tuvieran por objeto perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible. La víctima podrá también ejercer esas acciones civiles ante el tribunal civil correspondiente. Con todo, admitida a tramitación la demanda civil en el procedimiento penal, no se podrá deducir nuevamente ante un tribunal civil. Con la sola excepción indicada en el inciso primero, las otras acciones encaminadas a obtener la reparación de las consecuencias civiles del hecho punible que interpusieren personas distintas de la víctima, o se dirigieren contra personas diferentes del imputado, deberán plantearse ante el tribunal civil que fuere competente de acuerdo a las reglas generales”

De esta norma se desprende que la víctima de un delito, puede demandar la responsabilidad civil que derive del hecho punible, tanto en sede penal como en la civil, pero con una limitación, que admitida a tramitación la demanda civil en el proceso penal, no puede deducirla nuevamente ante el tribunal civil correspondiente.

Incluso, el **artículo 60** le impone a la víctima un plazo perentorio para presentar en el proceso penal su demanda civil, a saber, en la oportunidad del artículo 261 del Código Procesal Penal, es decir, hasta quince días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia de preparación del juicio oral.

Por otra parte, dicho cuerpo normativo, en su **artículo 61**, establece derecho de la víctima de preparar su demanda civil, estableciendo incluso que ello interrumpe la prescripción de la acción civil. Así el inciso tercero de dicha norma explicita *“La preparación de la demanda civil interrumpe la prescripción. No obstante, si no se dedujere demanda en la oportunidad prevista en el artículo precedente, la prescripción se considerará como no interrumpida”*.

Finalmente, el **artículo 68 del Código Procesal Penal**, establece una regla especial en cuanto al curso de la acción civil cuando el proceso penal se suspende o termina, explicitando sobre el particular lo siguiente *“... Si antes de comenzar el juicio oral, el procedimiento penal continuare de conformidad a las*



normas que regulan el procedimiento abreviado, o por cualquier causa terminare o se suspendiere, sin decisión acerca de la acción civil que se hubiere deducido oportunamente, la prescripción continuará interrumpida siempre que la víctima presentare su demanda ante el tribunal civil competente en el término de sesenta días siguientes a aquél en que, por resolución ejecutoriada, se dispusiere la suspensión o terminación del procedimiento penal.

En este caso, la demanda y la resolución que recayere en ella se notificarán por cédula y el juicio se sujetará a las reglas del procedimiento sumario. Si la demanda no fuere deducida ante el tribunal civil competente dentro del referido plazo, la prescripción continuará corriendo como si no se hubiere interrumpido.

Si en el procedimiento penal se hubieren decretado medidas destinadas a cautelar la demanda civil, éstas se mantendrán vigentes por el plazo indicado en el inciso primero, tras el cual quedarán sin efecto si, solicitadas oportunamente, el tribunal civil no las mantuviere.

Si, comenzado el juicio oral, se dictare sobreseimiento de acuerdo a las prescripciones de este Código, el tribunal deberá continuar con el juicio para el solo conocimiento y fallo de la cuestión civil”

Conforme a esta norma, intentada la demanda civil en la oportunidad que indica el artículo 261 del Código y para el caso que el juicio se suspenda o termine por los motivos que se indican en el artículo transcrito, se le otorga un plazo a la víctima para presente su demanda ante el Juzgado Civil que corresponda, manteniéndose interrumpida la prescripción en dicho caso.

En resumen, de las normas transcritas, se desprende que el plazo de prescripción de la acción civil se interrumpe en el proceso penal, siempre que se cumplan ciertos requisitos, esto es, que la víctima prepare su demanda civil y luego presente su demanda civil en la oportunidad antes indicada - hasta quince días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia de preparación del juicio oral -, la que debe estar contenida, conforme lo dispone el artículo 60 inciso primero del mencionado Código, en su acusación particular o en su adhesión a la acusación fiscal, debiendo hacerse igualmente presente que dichas disposiciones legales no contemplan, ni expresa ni tácitamente, que la interposición de la querella criminal tenga el efecto de interrumpir el plazo de prescripción de la acción civil, salvo que, como se dijo, la víctima la haga valer, en sede penal, cumpliendo las formalidades que establece el Código Procesal Penal.

En el mismo sentido expuesto, el profesor don **ENRIQUE BARROS**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JVVLMXPWBX

BOURIE, en la obra citada, en lo referente a la **interrupción de esta prescripción**, sostiene que “a) De acuerdo con las reglas generales, la prescripción de la acción de responsabilidad se interrumpe natural o civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor expresa o tácitamente la obligación, y civilmente por la presentación de la demanda judicial (artículo 2518); b) En el procedimiento penal la prescripción se interrumpe además de manera previa a la presentación por la víctima de la demanda civil. En efecto la víctima puede preparar la demanda civil solicitando la práctica de diligencias que estime relevantes para ese fin. Con todo, la interrupción está condicionada a la presentación oportuna de la demanda, de modo que si no es presentada, la prescripción no se considerará interrumpida (Código Procesal Penal, artículo 61 III)”. Agrega que “Además, si el procedimiento penal no llegara a juicio oral y continuara de conformidad a las reglas que rigen el procedimiento abreviado, o por cualquier causa terminara o se suspendiera, sin que se falle la acción civil oportunamente deducida, la prescripción continuará interrumpida, siempre que dentro del plazo de sesenta días, contados desde que por resolución firme se disponga la suspensión o terminación del procedimiento, la víctima ejerza acción civil ante el tribunal competente. Si la demanda no fuere deducida en ese plazo ante el tribunal civil, la prescripción continuará corriendo como si no se hubiese interrumpido (Código Procesal Penal, artículo 68).

DÉCIMO TERCERO: Que, con el mérito de lo obrado en la **causa RIT O-7556-2017, del Juzgado de Garantía de Antofagasta**, se puede concluir que la demandante de estos autos, en su calidad de querellante, representada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no procedió conforme a los artículos antes transcritos del Código Procesal Penal, toda vez que, no preparó demanda civil, ni la presentó hasta los 15 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de audiencia de Preparación de Juicio Oral, de manera tal que, el cálculo del plazo de prescripción del arbitrio civil objeto de esta decisión, no se interrumpió durante la tramitación de dicho proceso en aquella sede.

DECIMO CUARTO: Que, despejado lo anterior, conforme a las alegaciones planteadas por la demandante, corresponde dilucidar si el libelo presentado en esta sede, en el periodo de tiempo en el que se encontró vigente el estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública decretado a consecuencia del Covid-19, interrumpió o no el plazo extintivo en análisis, para lo cual, debe estudiarse, lo que acerca de ello, mandataba el hoy derogado artículo 8 de la ley 21.226.

Primeramente, hay que indicar que conforme al mérito del proceso, se



presentó demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile primitivamente, **con fecha 26 de mayo de 2021**, confiriéndose traslado de la misma **con fecha 09 de marzo de 2022**, momento a partir del cual el presente juicio, comenzó a tramitarse conforme a las reglas del Juicio de Hacienda, a lo que debe adicionarse que la demandante con posterioridad a ello rectificó su demanda, el **día 25 de enero de 2022** procediéndose a la notificación del demandado Fisco de Chile, tanto del libelo pretensor, su proveído y ampliación de demanda, el **día 07 de abril de 2022**.

Que dicho emplazamiento al no haberse alegado nulidad de ningún tipo, ha de considerarse válido, momento a partir del cual, se generó la relación jurídica procesal entre las partes.

A su turno, el hoy derogado **Artículo 8 de la ley 21.226** disponía: *“Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, se entenderá interrumpida la prescripción de las acciones por la sola presentación de la demanda, bajo condición de que esta no sea declarada inadmisibile y que sea válidamente notificada dentro de los cincuenta días hábiles siguientes a la fecha del cese del referido estado de excepción constitucional, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, o dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que la demanda fuere proveída, lo que suceda último”.*

De la norma ante reseñada, es dable concluir que, para que la interposición de la demanda produjese la interrupción del cómputo de la prescripción de la acción civil que en ella se contiene, debía necesariamente cumplirse con dos requisitos, el primero, que el libelo fuese acogido a tramitación, y el segundo, que la notificación de la demanda se produjese en uno de los dos momentos que dicha regla especial contempla, a saber: **a)** una vez declarada admisible que sea válidamente notificada dentro de los cincuenta días hábiles siguientes a la fecha del cese del referido estado de excepción constitucional, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, o **b)** dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que la demanda fuere proveída, **lo que suceda último**.

En el presente caso, luego de correcciones del procedimiento como consecuencia del incidente de nulidad promovido por el fisco de Chile, la demanda de autos, como su rectificatoria, finalmente fueron proveídas el **09 de marzo de 2022**, tal como se lee de la resolución de folio 5, del cuaderno de incidente de nulidad, esto es, luego de alzado el Estado de Excepción



constitucional, lo que ocurrió el 30 de noviembre de 2021.

Por lo anterior, habiéndose presentado la demanda durante la vigencia del estado de Excepción antes reseñado, y habiéndose acogido a tramitación conforme a las reglas del Juicio de hacienda, ya vencido éste, lo que debe determinarse es, si desde la providencia que le da curso, y hasta que la misma fue notificada a la demandada, transcurrió o no el plazo de **30 días** al que se hizo referencia, por haber ocurrido esto último.

Así las cosas, calculando el plazo de 30 días antes mencionado, desde la fecha de la resolución que tiene por interpuesta la demanda y hasta su notificación, hecho acaecido el **07 de abril de 2022**, transcurrieron 25 días, por lo que operó la interrupción de la prescripción consagrada en la norma en análisis.

La interpretación anterior, se efectúa al tenor literal de lo mandado en el artículo 8 de la Ley 21.226, en el cual, si bien se establecen dos fórmulas de cálculo para entender interrumpida la prescripción con la sola interposición de la demanda durante el estado de excepción consta, lo cierto es que, en el presente caso, lo último que ocurrió fue la expedición de la resolución que, acogiendo un incidente por el Fisco de Chile, anuló el procedimiento hasta el momento de proveer como en derecho corresponde, el libelo de folio 1, hecho acaecido el 09 de marzo de 2022, momento a partir del cual, por ser lo último sucedido, empezó a correr el plazo de 30 días con que contaba la actora para notificar al Fisco de Chile, cumpliendo con dicha exigencia legal, al materializarse ésta, el día de 25 de aquel plazo.

De acuerdo a lo anterior, habiéndose interrumpido legamente el plazo de prescripción, cabe recordar que el efecto propio de este instituto consiste en hacer perder el tiempo de prescripción transcurrido hasta el momento que se produce la interrupción debiéndose iniciar un nuevo cómputo en aquellos casos que corresponda, tal como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, en sentencia dictada en causa Rol N° 88733-2021, cuyo considerando décimo séptimo explicita: *“Que, el efecto propio de la interrupción es hacer perder el tiempo ya corrido de la prescripción y permitir, cesado sea ese efecto, el inicio de una nueva prescripción”*. Razones todas por las **cuales se rechazará** la excepción promovida por el Fisco de Chile en la contestación de la demanda, tal como se dirá en lo resolutivo de la sentencia.

II.- En cuanto a la demanda indemnizatoria:

DÉCIMO QUINTO: Que corresponde entonces emitir pronunciamiento en relación al fondo de la cuestión sometida a la decisión de este Tribunal.

En este sentido, del análisis de los antecedentes documentales



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JVVLMXPWBX

allegados a la carpeta electrónica judicial, especialmente de la sentencia ejecutoriada dictada con **fecha 12 de noviembre de 2019** por el Juzgado de Garantía de esta ciudad, es posible establecer que el día **01 de junio de 2017**, a eso de las 18:00 horas aproximadamente, don Samuel Andrés Cerda Tapia, en su calidad de Carabinero realizaba un control de identidad junto a otro funcionario de Carabineros, a personas que se encontraban en un parque existente en la calle Ricaventura con Oficina Petronila de esta ciudad, situación que fue observada por la víctima Aleksandra Katarina Rendic Vargas, quien comenzó a grabar dicho procedimiento con su teléfono celular, acto seguido, el imputado junto al otro funcionario se dirigen al lugar donde se encontraba ésta, quien estaba acompañada por su pololo.

Luego, los mencionados funcionarios policiales les realizan un control de identidad, procediendo a registrarlos, generándose un altercado con el pololo de la víctima ante su negativa de hacer entrega de su billetera, lo que provocó que la Srta. Rendic tomara los documentos de éste y comenzara a caminar en dirección a su domicilio - que se encontraba a poca distancia – siendo seguida por el imputado y cuando la alcanza, abusando de su cargo y funciones, por la espalda, la toma desde atrás por el cuello y el brazo derecho, dándole una vuelta y aplicándole de forma injustificada, desproporcionada y deliberada una llave en la pierna izquierda, lo que provocó que cayera bruscamente al suelo, percatándose de inmediato la actora que se había lesionado su pierna, por el fuerte dolor que de inmediato empezó a sentir, solicitándole al funcionario ayuda, el que lejos de ayudarla, la privó de libertad y esposó, sentándose sobre ella, agravando intencionalmente la contusión sufrida, para luego subirla a la fuerza al carro policial, pese a que no podía caminar, dándose cuenta que le habían roto la pierna.

A raíz de este hecho, la demandante resultó con una fractura distal de peroné izquierdo y en rodilla izquierda, rotura del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento colateral medial, rotura parcial del ligamento colateral lateral y rotura parcial de la capsula articular, lesiones de carácter Grave, según informe de lesiones N° 344/2017 del SML.

Cabe adicionar que, conforme quedó asentado en el fallo en comento, la víctima resultó con las lesiones físicas señaladas y con secuelas psíquicas como lo es el **trastorno depresivo mayor**, que le detectó el psicólogo del Servicio Médico Legal de Antofagasta, quien la examinó siguiendo para estos efectos los parámetros que establece el Protocolo de Estambul, para la investigación y documentación de la tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos y degradantes.



DÉCIMO SEXTO: Que tal como quedó consignado en la parte expositiva de esta sentencia, las demandantes solicitan, en atención a los fundamentos de hecho expuestos en su libelo, que se les indemnice el daño emergente y moral experimentado como consecuencia de las agresiones físicas y sicológicas del funcionario de Carabineros don Samuel Andrés Cerda Tapia cometidas en su contra, peticionando se condene al Fisco de Chile, en razón de la responsabilidad extracontractual que le cabe en el actuar de dicho agente policial debido a su falta de servicio, a pagarle a la demandante doña Cecilia Vargas Estay, por concepto de indemnización del daño emergente, la suma de \$6.336.353.- y por concepto de daño moral, la suma de \$40.000.000.- y respecto de doña Aleksandra Rendic por concepto de daño moral, la suma de \$100.000.000.- sumas que solicitan sean debidamente reajustadas con los intereses legales correspondientes, más el pago de las costas de la causa.

Por su parte, el demandado solicita el rechazo de la demanda alegando la inexistencia del pretendido estatuto especial de responsabilidad extracontractual del estado, que no es responsable por el hecho de sus dependientes, si se ha ejecutado de un modo impropio que no ha podido prever o impedir y lo exagerado del monto de la indemnización demandada por concepto de daño moral.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que en primer término, la parte demandada alegó la inexistencia de responsabilidad extracontractual del Estado, debiendo señalarse en este aspecto primeramente - sin perjuicio de la normativa legal y constitucional invocada por los actores - que dicha alegación deberá ser desestimada, por cuanto el sistema de responsabilidad extracontractual del estado actualmente vigente en Chile, - encuentra sus normas rectoras en el **artículo 38 de la Constitución Política de la República y los artículos 4 y 44 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la administración del Estado** -, las que reconocen como fundamento la noción de falta de servicio, la que se encuadra en la categoría de *responsabilidad por culpa de la Administración*.

Por otra parte, resulta útil tener presente en este punto, lo sostenido ya reiteradamente por nuestro máximo tribunal de justicia, al señalar que “la falta de servicio no es una responsabilidad objetiva, sino subjetiva, basada en la falta de servicio, en la que aquella, considerada como “*la culpa del servicio*”, *deberá probarse - por quien alega - el mal funcionamiento del servicio, el funcionamiento tardío o el no funcionamiento del mismo, que esta omisión o acción defectuosa haya provocado un daño al usuario o beneficiario del servicio público que se trata; y en fin, que la falla en la actividad del ente administrativo*



haya sido la causa del daño experimentado, todo por disponerlo así el artículo 42 de la citada Ley de Bases de la Administración del Estado". (Corte Suprema, Rol 10.240-2015, considerando noveno).

Idéntica posición ha adoptado nuestra Corte de Apelaciones de Antofagasta, el señalar que: *"De ser cierta la alegación del fisco en orden a que la responsabilidad del estado ha sido entendida por el Tribunal inferior como una de carácter meramente objetiva, habría bastado para aquel tener por configurada la relación de causalidad para asignar responsabilidad extracontractual al Estado, prescindiendo absolutamente del examen de la culpa de la Administración"*. (Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol Corte 401-2016, considerando segundo). Por otro lado, este mismo fallo deja asentando el régimen normativo aplicable a este tipo de casos, al señalar que "...debe darse preminencia a la normativa constitucional y aquella de la Ley de Bases de la Administración del Estado que resultan aplicables, por sobre aquellas de carácter general, por lo que en consecuencia, existiendo un ámbito debidamente delimitado para tratar de la responsabilidad extracontractual del Estado, con normas y principios propios, debe estarse a éste antes que al supletorio" (considerando tercero, fallo citado).

DÉCIMO OCTAVO: Que de lo anteriormente reseñado, cabe concluir que la responsabilidad estatal encuentra su regulación en nuestra carta fundamental y en la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, por lo que quien pretenda hacer efectiva la responsabilidad de los órganos del Estado, deberá acreditar el mal funcionamiento del servicio, lo que implica efectuar un reproche al actuar de la Administración, siendo los presupuestos de la responsabilidad, *haber incurrido el órgano estatal en una falta de servicio; que la falta de servicio haya producido un daño al usuario de dicho órgano estatal y la relación de causalidad existente entre el daño y la falta de servicio*.

DÉCIMO NOVENO: Que corresponde entonces analizar los elementos de la responsabilidad de la Administración y determinar si existió falta de servicio por parte del Fisco de Chile en los hechos ocurridos el 01 de junio de 2017, en que resultó lesionada la actora Aleksandra Katarina Rendic Vargas.

Lo primero que debe tenerse presente es que dentro de la responsabilidad patrimonial del Estado, se encuentra la responsabilidad por falta de servicio, la cual tiene su basamento legal en el **artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado**, que prescribe: *"el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones"*.



Por otro lado, nuestra Corte Suprema de Justicia, ha señalado reiteradamente el concepto de falta de servicio, indicando que ***“la falta de servicio se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del Servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando aquel no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente”***. (Corte Suprema, Rol 2743-2015, considerando octavo).

De esta forma, la falta de servicio opera como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria, la cual se produce si alguno de los órganos administrativos no actúa debiendo hacerlo, si su actuación es tardía o defectuosa, causando perjuicios a los usuarios o destinatarios del servicio público, debiendo estos últimos invocar y acreditar la existencia de esta falta y que la misma causó daño a la persona afectada. Esta proposición encuentra consagración positiva en el **artículo 42 de la citada Ley**, que indica que “los órganos de la Administración del Estado serán responsables del daño que causen por falta de servicio”.

Por último, el **artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros** señala que: *“Carabineros de Chile es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley.*

Dependerá directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y se vinculará administrativamente con éste a través de la Subsecretaría del Interior.

Carabineros se relacionará con los Ministerios, Delegaciones Presidenciales Regionales, Delegaciones Presidenciales Provinciales y demás autoridades Regionales, Provinciales o Comunales, por intermedio de la Dirección General, Altas Reparticiones, Reparticiones y Unidades, según corresponda.

Derivado de las particulares exigencias que imponen la función policial y la carrera profesional, los organismos y el personal que las desarrollan, así como sus institutos de formación profesional, se ajustarán a normas jurisdiccionales, disciplinarias y administrativas que se establecen en esta ley y en la legislación respectiva.”

A su turno, el **artículo 2 inciso 1° de dicha Ley** prescribe: *“Carabineros de Chile como cuerpo policial armado es esencialmente obediente, no deliberante, profesional, jerarquizado y disciplinado y su personal estará sometido a las normas básicas establecidas en la presente ley orgánica,*



su Estatuto, Código de Justicia Militar y reglamentación interna.”

Cabe referir que fluye del **artículo 19 inciso 2° del mismo cuerpo normativo**, que se les confiere a los miembros de la institución los mismos derechos que a los funcionarios de la administración de estado para los fines de becas estudiantiles, al señalar que: *“El personal que cuente con el respectivo patrocinio Institucional tendrá acceso, además, **en condiciones de igualdad con los funcionarios de la Administración del Estado**, a los diferentes programas de becas de perfeccionamiento o capacitación, en el país o en el extranjero”*.

Sin perjuicio de lo indicado, cabe recordar que el delito por el que fue condenado el ex Funcionario de Carabineros Cerda Tapia, autor de los daños físicos y psicológicos que doña Aleksandra Rendic demanda en el presente juicio, es el previsto y sancionado en el artículo 150 D del Código Penal, el que se encuentra contenido en el Libro III de dicho Código (De los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantizados por la Constitución.), en el párrafo intitulado “De la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y de otros agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantizados por la Constitución”, por lo que resulta ser incuestionable que dicho agente policial debe ser considerado funcionario público que formó parte de una institución que depende directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Por último, el Código Punitivo define al **empleado o funcionario público como** *“...todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en la Administración Central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean de nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldo del Estado...”*.

VIGÉSIMO: Que antes de entrar al análisis si en la especie se incurrió en la falta de servicio por la demandada, necesario es referirse a la alegación planteada por el Fisco en su contestación, en cuanto a que **no es responsable por el hecho de sus dependientes, si se ha ejecutado de un modo impropio que no ha podido prever o impedir**, debiendo reseñarse al respecto que, aunque no se señale expresamente en dicho escrito, se está invocando una eximente de la responsabilidad extracontractual por hecho ajeno, estatuto que se regula específicamente en los **artículos 2320 inciso cuarto y 2322, ambos del Código Civil**.

El **artículo 2320 inciso primero del indicado cuerpo legal**, establece la regla general en cuanto a la responsabilidad que tiene cualquier persona que



se encuentra en posición de autoridad o cuidado respecto de otra: *“Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”*. Agrega su inciso cuarto: *“Así los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos, mientras están bajo su cuidado; y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso.”*

A su turno, el **artículo 2322 del Código Civil** que expresa: *“Los amos responderán de la conducta de sus criados o sirvientes, en el ejercicio de sus respectivas funciones; y esto aunque el hecho de que se trate no se haya ejecutado a su vista.*

Pero no responderán de lo que hayan hecho sus criados o sirvientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, si se probare que las han ejercido de un modo impropio que los amos no tenían medio de prever o impedir, empleando el cuidado ordinario, y la autoridad competente. En este caso toda la responsabilidad recaerá sobre dichos criados o sirvientes”.

Esta responsabilidad, es la que se conoce como **Responsabilidad por el Hecho Ajeno y según don RENÉ ABELIUK MANASEVICH** (obra citada, págs. 259 y ss.), se llama así porque “la causa del daño es directamente el hecho de otra persona..., pero responde el que tiene el cuidado de la persona, por presumir la ley que ha faltado a su deber de vigilancia”. Añade que también se llama a esta responsabilidad indirecta porque no se indemniza el daño causado directamente, sino por otra persona.

En resumen, la define como la responsabilidad “que deriva de los delitos y cuasidelitos de las personas capaces de cometerlos que se encuentran en la relación expresamente prevista en la ley respecto del responsable”.

Este estatuto de responsabilidad se encuentra regulado, en nuestro Código Civil, entre los artículos 2320 a 2322 y sus requisitos, conforme lo expresa este mismo autor, son los siguientes:

1° Un determinado vínculo entre hechor y responsable, que generalmente será de subordinación o dependencia.

En este punto, el mencionado profesor manifiesta que debe existir un vínculo de subordinación o dependencia entre el responsable y el hechor, porque si el fundamento de ella es una falta de vigilancia, es necesario que se tenga autoridad respecto de la persona por quien se responde.

2° Que ambos, hechor y responsable, tengan capacidad extracontractual.

Explicita **ABELIUK**, sobre el particular, que al no distinguir la Ley (art. 2319) la capacidad en los hechos ilícitos, ni entre responsabilidad la por el



hecho propio o ajeno, ambos, esto es, quien cometió el hecho ilícito como quien lo tenía a su cuidado no deben estar comprendidos entre las causales de incapacidad.

3° Que el hechor haya cometido un hecho ilícito, concurriendo todos los requisitos propios de éste.

Refiere el autor citado, que en la responsabilidad por el hecho ajeno hay obligación de indemnizar la comisión de un delito o cuasidelito cometido por la persona de quien se responde, debiendo reunir todos los requisitos de la responsabilidad extracontractual ya analizados.

En conclusión, concurriendo estos requisitos, se presume la responsabilidad del empresario por los hechos cometidos por sus dependientes, que se encuentran bajo su cuidado o dependencia, salvo que pruebe que con su autoridad y cuidado no habría podido evitar el hecho.

En el mismo sentido razona el profesor don **ENRIQUE BARROS BURIE** (Obra citada, págs. 180 y siguientes) quien refiere que para que se presuma la culpa del empresario por la culpabilidad del hecho de quienes se encuentran bajo su dependencia o cuidado, deben concurrir los siguientes requisitos:

“i) que exista una relación de cuidado o dependencia entre el autor del daño y el empresario;

ii) que el daño sea ocasionado en el ámbito de la dependencia o del ejercicio de las funciones del dependiente; y

iii) que el dependiente haya incurrido en un delito o cuasidelito civil.”

Agrega que, cumplidas estas condiciones se presume la culpa del empresario quien para desvirtuar esta presunción “deberá probar que con la autoridad y el cuidado que su calidad le confiere y prescribe, no ha podido impedir el hecho, según lo disponen los artículos 2320 y 2322I”.

Continúa este autor explicitando que *“... el empresario debe mostrar las precauciones que habría emprendido un empresario diligente y de qué manera, aun emprendiéndolas, no le habría sido posible evitar el accidente”,* adicionando que *“La descarga de la presunción supone hacerse cargo de todos los aspectos de la diligencia. Ante todo, la presunción se refiere a la falta de una diligencia proporcional al riesgo comprometido en la selección, entrenamiento y supervisión del personal. La prueba tiene que estar dirigida a demostrar que la culpa del dependiente no resulta atribuible a la culpa del empresario, quien le ha asignado una responsabilidad para la que estaba preparado y lo ha sometido a la vigilancia debida...”.*

El profesor **BARROS BOURIE** comenta, a propósito de lo



extremadamente difícil que resulta probar el cumplimiento de cada uno de los deberes de cuidado que se ha fallado que *“es necesario acreditar que el empresario ha efectuado actos “positivos y concretos” dirigidos a impedir el hecho culpable del dependiente, y que dichos actos han debido estar orientados a evitar errores en todos los ámbitos relevantes de la actividad empresarial”*. Dice, además, que *“la descarga de la presunción exige que se demuestre que aun empleando el cuidado debido, no se habría podido impedir el accidente, esto es, que aun con diligencia el daño atribuible al hecho del dependiente se habría producido”*. Finaliza indicando que *“En la práctica, la jurisprudencia exige que se acredite que el empresario le ha sido imposible impedir el hecho, lo que resulta análogo exigir la prueba de un caso fortuito”*.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, de acuerdo a lo indicado, en la responsabilidad extracontractual por el hecho ajeno, el legislador civil presume la culpa del empresario por la culpabilidad en el hecho de su dependiente, siempre que éste haya cometido el delito o cuasidelito civil en el ejercicio de las funciones, solo quedando exento de responder de los perjuicios causados por aquel, si prueba que pese haber empleado el debido cuidado, le fue imposible impedir el hecho dañoso.

Sobre este particular, debe indicarse que conforme se desprende de la prueba rendida, en especial, de la prueba documental incorporada a la carpeta electrónica judicial, analizada y valorada conforme a derecho, se puede concluir que, el día de ocurrencia del hecho cuya autoría se imputa al ex funcionario de Carabineros Cerda Tapia, éste se encontraba desempeñando labores propias de su cargo, en especial la de mantener el orden público, pues los hechos ilícitos por los que fue condenado en sede penal y que el Juzgado de Garantía de esta ciudad estimó como constitutivos del delito de tormentos o apremios ilegítimos, son la causa próxima e inmediata de los daños civiles reclamados por la actora y que se habrían generado al efectuar el control de identidad el día 01 de junio de 2017 a la actora Aleksandra Katrina Rendic Vargas, al aplicarle de forma injustificada, desproporcionada y deliberada una llave en la pierna izquierda, lo que provocó que cayera bruscamente al suelo, percatándose la víctima que se había lesionado, por el fuerte dolor que de inmediato empezó a sentir, solicitando ayuda al funcionario, el que lejos de asistirle, la privó de libertad y esposó, sentándose sobre ella, agravando intencionalmente la lesión sufrida para luego subirla a la fuerza al carro policial, pese a que no podía caminar.

En resumen, el supuesto delito civil cuya comisión se imputa por la actora al reseñado agente policial, fue perpetrado en su calidad de empleado



público de una institución que depende directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública tal como indica la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.

Así, de lo razonado precedentemente, resulta acreditado el primer supuesto de la responsabilidad extracontractual por hecho ajeno, esto es, que entre hechor y responsable, existía a la fecha de ocurrencia de los hechos un determinado vínculo de subordinación o dependencia, ya que, como se dijo, al día 01 de junio de 2017 el agente policial Cerda Tapia era funcionario activo de Carabineros de Chile y habría cometido el hecho dañoso en el ejercicio de las funciones que le impone la Constitución Política de la República (arts. 100 y siguientes) y su Ley Orgánica Constitucional, debiendo reiterarse que la institución de la que formaba parte depende directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que como Ministerio que es - según lo estatuido en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado – es un órgano superior de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración en su respectivo sector, en conclusión, es el Estado de Chile el empleador del responsable del ilícito civil que sirve de fundamento a la demanda.

En cuanto a la segunda condición, a saber, que hechor y responsable, tengan capacidad extracontractual, debe indicarse que del mérito de la sentencia criminal tanta veces citada, se desprende que el Carabinero condenado por ella y que es causante de los perjuicios, es mayores de edad al haber sido sentenciado como autor de un delito al que se le asignaron penas que solo pueden aplicarse a ciudadanos que tienen mayoría de edad, pues en dicha decisión jurisdiccional no se hizo aplicación de la ley sobre responsabilidad penal adolescente (Ley 20.084).

En lo que respecta a la demandada, es incuestionable que tiene personalidad jurídica, que actúa en el tráfico privado a través de la figura del Fisco de Chile.

Finalmente, sobre el tercer requisito de este tipo especial de responsabilidad extracontractual, que el hechor haya cometido un hecho ilícito, se debe indicar que tal como quedó asentado en motivaciones previas, quedó demostrado que a la fecha de ocurrencia del hecho, el autor del daño era personal activo y dependiente de Carabineros de Chile, institución que, a su vez, depende directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quienes en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, durante su jornada de trabajo y en clara infracción a sus deberes funcionarios, mediando dolo, cometió un acto que causó daños físicos y psicológicos a la actora Rendic



Vargas.

En conclusión, en el presente caso, conforme a la prueba rendida, se configuran los presupuestos de la responsabilidad analizada, debiendo reiterarse que como fluye del **artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado**, el Estado debe responder por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones.

Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto a la eximente de responsabilidad alegada, debe determinarse si la demandada aportó probanzas tendientes a desvirtuar la presunción de culpabilidad que le impone la ley por los ilícitos civiles que cometan sus dependientes en el ejercicio de sus funciones y, en definitiva, acoger o rechazar la pretensión de las actoras formulada en su demanda, toda vez que – tal como ya se reseñó – es carga de dicha parte acreditar que pese haber empleado el debido cuidado, le fue imposible impedir el hecho dañoso cometido por sus dependientes.

Sobre el particular debe indicarse que la parte demandada sólo acompañó un documento intitulado “Manual de operaciones para el control del Orden Público”, lo que en ningún caso permite probar que adoptó las medidas necesarias tendientes a evitar o impedir el daño causado a la víctima y, que pese a ello, no pudo evitarlo, pues dicho instrumento más bien es un manual de procedimiento o de principios de Carabineros de Chile, pero no existen probanzas tendientes a acreditar que el Estado de Chile, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública o, en su defecto, Carabineros de Chile desplegó esfuerzos o acciones tendientes a capacitar o instruir a sus funcionarios para disuadirlos de cometer actos que pueden importar vulneración de garantías fundamentales y que no obstante ello, le fue imposible que éstos cometieran, con dolo, el hecho dañoso y más bien, de la prueba aportada, valoradas conforme a las reglas legales, permiten concluir que la demandada actuó en **forma deficiente y negligente** a fin de evitar el suceso acaecido el 01 de junio de 2017, en el cual resultó con lesiones graves y daño psicológico doña Aleksandra Rendic.

De acuerdo a lo ya razonado, concurriendo en la especie los requisitos de la responsabilidad extracontractual por el hecho ajeno y no habiéndose logrado desvirtuar por el Fisco de Chile la presunción de culpabilidad que, por ley, le cabía en el acto dañoso de sus dependientes, se rechazará la eximente de responsabilidad alegada, correspondiendo analizar si con la prueba existente en autos, se logra acreditar que efectivamente se incurrió por la demandada en la falta de servicio que sirve de sustento a la responsabilidad extracontractual



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JVVLMXPWBX

demandada en esta sede.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que en lo referente a si en la especie se incurrió, por la demandada, en una falta de servicio, debe recordarse que ella ha sido conceptualizada como una deficiencia o mal funcionamiento del Servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando aquel no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente.

Conforme a los hechos ya asentados en esta sentencia – que se dan por reproducidos –, la conducta ilícita desplegada por el agente policial, en su calidad de funcionario público y en el ejercicio de sus funciones – por las que fue condenado, en sede penal, a sendas penas privativas de libertad –, necesariamente llevan a concluir que el servicio que éste debía prestar al estado, conforme a los deberes que les imponía la Constitución Política como la Ley Orgánica de Carabineros de Chile, fue realizado de manera irregular y/o defectuosa, al no cumplir la finalidad que el ordenamiento jurídico les imponía, esto es, la de **garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior del país**, lo que indiscutiblemente importa, existiendo un estado de normalidad, que los funcionarios policiales deban proteger la vida e integridad física y psíquica de los ciudadanos de la República que están bajo su custodia, quienes por el contrario desplegaron acciones que afectaron gravemente, tanto física como psicológicamente a la actora, no debiendo perderse de vista que la misión encomendada al reseñado agente del estado se reducía a efectuar el control de identidad, pero no proferir malos tratamientos, físicos y psicológicos, que en el presente caso fueron de gravedad para la actora Rendic Vargas atendidas las lesiones sufridas, todo lo cual constituye una falta de servicio por la que debe responder el Estado Administrador, toda vez que los daños causados a la víctima fueron cometidos por sus funcionarios, empleados o dependientes, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo.

VIGÉSIMO TERCERO: Que en relación al segundo requisito de la responsabilidad estatal, es decir, **el daño provocado a la víctima**, tal como se ha venido examinando, del análisis de la sentencia ejecutoriada dictada en sede penal, se puede establecer que las lesiones sufridas por la demandante, se produjeron con ocasión de la falta de servicio desarrollada en el considerando precedente.

Cabe precisar, sin perjuicio de los hechos asentados en el fallo penal, que se incorporaron a la carpeta electrónica antecedentes documentales, en especial del Dato de Atención de Urgencia, que permite dar por asentado que a la actora Aleksandra Rendic Vargas, se le constataron lesiones, siendo las



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JVVLMXPWBX

19:25 horas del día 01 de junio de 2017, constando la siguiente hipótesis diagnóstica: “Fractura Peroné de tipo grave”, a lo que debe añadirse el *Informe de Lesiones N°344/2017* el cual fue confeccionado por el médico legista del Servicio Médico Legal de Antofagasta el cual señala al momento de entregar los antecedentes clínicos que la actora, “es llevada por Carabineros a Urgencia del Centro Asistencial Norte, donde se le diagnosticó: Fractura Distal de Peroné izquierdo y sus lesiones fueron catalogadas como de carácter grave, según Dato de atención de Urgencia N° 1706010160. Añade que al día siguiente fue evaluada por el Dr. Avendaño, Traumatólogo, quien la opera el día 13/06/2017, en el Hospital Militar del Norte de Fractura Distal de Peroné Izquierdo, realizándose reducción y Osteosíntesis con placa y tornillo.

Resonancia Nuclear Magnética de Rodilla Izquierda de fecha 05/06/17, que informa como diagnóstico: Rotura del Ligamento cruzado anterior, Rotura del ligamento Colateral Medial, Rotura parcial del Ligamento colateral y lateral y rotura Parcial de la cápsula Articular.

Concluye que *“de acuerdo a los antecedentes aportados por la afectada, sus antecedentes clínicos, el examen físico y los exámenes de imágenes realizados: doña ALEKSANDRA KATARINA RENDIC VARGAS, presentó: Fractura distal de Peroné Izquierdo y en rodilla izquierda: Rotura del Ligamento Cruzado anterior, Rotura del Ligamento Colateral Medial, Rotura parcial del Ligamento Colateral Lateral y Rotura parcial de la cápsula Articular, compatibles con sufrir una torsión de su extremidad inferior izquierda teniendo el pie fijo en el suelo y con posterior caída hacia atrás, con un pronóstico médico legal **GRAVE**, con un periodo de recuperación mayor a 30 días, con la incapacidad funcional de igual periodo.*

La afectada debió ser operada de Fractura Distal de Peroné izquierdo, realizándose Reducción y Osteosíntesis con placa y tornillo. “

A lo anterior, se debe sumar el contenido del informe psicológico del Servicio Médico Legal, emitido por don Gabriel Ricardo Mejías Araya, Psicólogo Forense de la Unidad de Salud Mental Adulto del Servicio Médico Legal y confeccionado según el Protocolo de Estambul, de fecha 25 de junio de 2018, en cuya impresión clínica se indicó lo siguiente: ***“En virtud a la evaluación pericial psicológica realizada en contexto de protocolo de Estambul, que incluye la lectura de la carpeta investigativa y toda la metodología implementada, se puede informar que doña ALEKSANDRA KATARINA RENDIC VARGAS presenta secuelas psicológicas que ha sufrido en virtud del delito de Lesiones Graves –APREMIO ILEGÍTIMOS”.***

También, se acompañó a la carpeta electrónica, documentos



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JVVLMXPWBX

consistentes en: informe médico de fecha 05 de junio de 2017 efectuado a propósito de la resonancia magnética realizada a la demandante Rendic Vargas, emitida por el Médico Radiólogo Dr. Pablo Andrés Cikutovic Molina, el certificado médico emitido por el traumatólogo D. José Venegas Toro de fecha 02 de junio de 2017 en el cual se indica reposo por el periodo de un mes al ser portadora de una fractura de peroné izquierdo; Epicrisis de fecha 13 de junio de 2017 el cual indica un diagnóstico de egreso: Fractura Tobillo izquierdo operado, con tratamiento reducción + osteosíntesis, emitida por el Dr. Alejandro Avendaño Machiavello, receta de fecha 31 de julio de 2017, emitida por el mismo profesional que indica como diagnóstico, Inestabilidad rodilla izquierda con indicaciones RNM rodilla izquierda, asimismo se acompañó informe radiografía de pierna izquierda, realizada el 31 de julio de 2017 emitida por el médico Radiólogo José Núñez Alvarado y finalmente consta copia de la ficha de Hospitalización del Hospital del Trabajador ACHS, de fecha 07 de marzo de 2018, en la cual se indica el procedimiento efectuado consistente en reconstrucción de LCA con STG, sinovectomía artroscópica, y finalmente el diagnóstico de fecha 25 de abril de 2018 emitido por el Dr. Rainhold García Straube especialista en traumatología y ortopedia, que señala que respecto de la paciente doña Aleksandra Rendic Vargas, Lesión completa de ligamento cruzado anterior de rodilla izquierda. Paciente portadora de lesión de ligamento cruzado anterior con inestabilidad franca. Estudio con resonancia magnética, comprobó la apreciación clínica. Se realizó reconstrucción de ligamento cruzado anterior con tendón de semitendinoso gracilis. Evolucionó en buenas condiciones, requiriendo kinesioterapia posterior.

Conforme a la prueba documental descrita – inobjetada de contrario – ponderada conforme a las reglas legales, se puede concluir que como consecuencia de la falta de servicio establecida en el motivo precedente, la actora Rendic Vargas sufrió daños físicos, consistentes en una lesión grave del tipo fractura de Peroné, como también en la esfera de sus emociones consistente en secuelas psicológicas en virtud del delito de Lesiones graves de que fue víctima como consecuencia de la acción desplegada por un funcionario de Carabineros, quedando de manifiesto que la falta de servicio del órgano estatal demandado, provocó un daño a la actora, cumpliéndose así con este requisito de responsabilidad estatal.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, en relación al último de los presupuestos de la responsabilidad estatal, es decir, **la relación de causalidad existente entre el daño y la falta de servicio**, dado el contexto en el cual se desarrollaron los acontecimientos, es dable concluir que la falta de servicio desarrollada en el



considerando vigésimo primero, en conjunto con el daño analizado en la motivación precedente, se encuentran vinculadas entre sí y se ha cometido con ocasión de él, por cuanto si se realiza una supresión mental hipotética de los hechos analizados en la especie, desaparece también el resultado lesivo, es decir, si el funcionario de Carabineros de Chile causante de los daños demandados en autos, hubiese tomado todos los resguardos y respetando las garantías fundamentales que lo amparaban, en cumplimiento de un estándar mínimo de respeto a la integridad física y dignidad humana, lo que es esperable respecto de un servicio de las características Carabineros de Chile, cuyo rol - de acuerdo a la Constitución y su Ley Orgánica Constitucional - precisamente es velar por la mantención del orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República, el resultado causal no se hubiese producido, es decir, el daño a la víctima, por lo que no cabe sino deducir fundadamente que entre la falta de servicio del Órgano Estatal y el daño, existe una relación directa de causalidad.

VIGÉSIMO QUINTO: Que así las cosas, establecida por un lado la falta de servicio por parte de la entidad estatal en cuanto a los hechos sucedidos con fecha 01 de junio de 2017, en que resultó lesionada la actora Aleksandra Rendic Vargas producto de los malos tratos y daños físicos a los que se ha hecho mención en esta sentencia, y por el otro, el daño sufrido por la demandante; el que como ya se dijere, resultó con fractura de Peroné Izquierdo y rotura de ligamentos, con secuelas psicológicas, en términos tales que el daño sufrido por ésta como consecuencia de dichas lesiones se debió directamente a la omisión o falta de cuidado de una conducta esperable de la parte demandada de su obligación general de mantener el orden y la seguridad pública al interior del país, necesariamente importa que los agentes policiales que la conforman desplieguen conductas proporcionadas y racionales en el desempeño de sus funciones, pero no cometer – como acaeció en la situación fáctica en que se apoya el libelo - actos impulsivos y carentes de justificación racional, apartados del marco legal que rige su actividad y en clara infracción a garantías constitucionales de una ciudadana, lo que afectó gravemente su integridad física y psicológica.

De todo lo anterior, se puede concluir que en la especie se dan los presupuestos de la responsabilidad por falta de servicio reclamada respecto del Fisco, surgiendo en consecuencia para éste la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por las demandantes.

VIGÉSIMO SEXTO: Que en cuanto a la determinación de los perjuicios causados, la parte demandante reclama el pago de la suma de \$100.000.000.-



para doña Aleksandra Rendic por concepto de daño moral y para doña Cecilia Vargas madre de doña Aleksandra, las sumas de \$6.336.353.-, por daño emergente y \$40.000.000.- por daño moral, todo derivado de las lesiones físicas y emocionales provocadas por el hecho ilícito ya suficientemente descrito en motivaciones previas.

En este contexto, en primer término, se analizará la correspondencia del daño moral que alega doña Aleksandra Rendic Vargas, debiendo indicarse que este perjuicio, hoy en día se concibe del modo más amplio posible, incluyendo todo daño a la persona en sí misma –física o psíquica-, como todo atentado contra sus intereses extrapatrimoniales. Comprende entonces el daño moral el atentado a los derechos de la persona, a su salud, a su estética, esfera de intimidad, libertad, honor o sentimientos de afección.

Sobre este particular, la demandante rindió prueba documental consistente en el Informe Psicológico de don Gabriel Ricardo Mejías Araya, Psicólogo Forense de la Unidad de Salud Mental adulto del Servicio Médico Legal de Antofagasta, el que ya se detalló en el considerando vigésimo tercero de esta sentencia, en el que como se dijo, dicho profesional, siguiendo las directrices contenidas en el Protocolo Estambul, en el punto 10 de dicho informe indica que de acuerdo al “Inventario de Depresión de BECK (BDI), la peritada presentaría una depresión leve. Por otro lado, el “inventario de Síntomas SCL-90-R de L.Derogatis” indica que no se observa malestar exagerado o dramatizado por parte de la peritada. Pudiendo presentar síntomas tales como: DEPRESIÓN: al mostrar un estado de ánimo disfórico, falta de motivación, poca energía vital, sentimientos de desesperanza, ideaciones suicidas. Asimismo, cumpliría con los criterios para el diagnóstico de F32-4, trastorno depresivo mayor, episodio único en remisión parcial (296-2) del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-IV., concluyendo que doña Aleksandra Katarina Rendic Vargas presenta secuelas psicológicas sufridas en virtud del delito de Lesiones Graves- Apremios ilegítimos, debiendo reiterarse que conforme se desprende de los hechos asentados en este fallo la actora se vio expuesta, al uso de la fuerza descontrolada por Carabineros de Chile, pues resultó con fractura de peroné izquierdo fractura y rotura de ligamentos, episodio traumático que evidentemente produce en cualquier persona de rango medio una impresión fuerte, en su esfera emocional, más aun si se considera que esa experiencia de extrema violencia, es capaz de generar estigmas en la persona quien las sufre, difíciles de superar con el paso del tiempo.

También de las declaraciones contestes de los testigos, quienes dando razón de sus dichos señalaron que la demandante Rendic Vargas, sufrió daño



psicológico por las circunstancias que se relatan en la demanda, pues no podía caminar ni desplazarse normalmente, sino que lo hizo en una silla de ruedas durante su periodo de recuperación, lo que la llevó a tener una mascota como asistente emocional para que tuviera motivación e hiciera actividad física.

En suma, de la prueba aportada, ponderada de conformidad a las reglas legales, surgen una serie de presunciones que por gozar de los caracteres de gravedad, precisión y concordancia, conforme lo dispuesto en el **artículo 426 del Código de Procedimiento Civil** en relación al **artículo 1712 del Código Civil**, permiten aseverar que la demandante Aleksandra Rendic Vargas, sufrió angustia, dolor o sufrimiento moral o psicológico como consecuencia de las lesiones ocasionadas y malos tratamientos de obra y de palabra por funcionarios de Carabineros de Chile el día 01 de junio de 2017, lo que se tradujo en una fractura de peroné izquierdo y el padecimiento en su esfera psicológica que como ya se dijo, persistía a lo menos un año después de acaecido el suceso, lo que es demostrativo de las graves secuelas que le generó el actuar doloso del agente policial, más aún, que el ex funcionario de carabineros, en una conducta irracional y desmedida provocó en la actora, no solamente lesiones a nivel físico, sino que la sometió a una experiencia traumática que incuestionablemente le generó un daño psicológico de gran dimensión, a lo que debe sumarse lo evidente que resulta ser que la Srta. Rendic Vargas - debido a que estuvo cerca de un año sometida a diversos tratamientos médicos - experimentó una alteración de su vida normal, en especial si se toma en cuenta que ésta, a la época de ocurrencia del suceso vejatorio y violento relatado en esta sentencia, era una mujer sana y de 24 años de edad, presentándose como palmario que las incomodidades y frustraciones generadas por no poder desplazarse adecuadamente al estar su pierna fracturada, fue capaz de generar las consecuencias psicológicas que por esta sentencia se ordenará le sean resarcidas, por lo que será **acogida parcialmente** la demanda respecto a la indemnización que se reclama por el daño moral causado.

Sobre el quantum indemnizatorio, se tendrá en cuenta para su determinación, el largo tiempo que la actora Rendic Vargas estuvo sometida a tratamiento médico; las secuelas físicas del mismo, todas causadas directamente por el actuar ilegítimo del Carabinero Samuel Cerda Tapia.

En consecuencia, teniendo en especial consideración la edad de la actora a la época de ocurrencia del hecho fundamento de su pretensión, el acto extremadamente violento del que fue víctima por parte de un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, el largo tiempo empleado en la



recuperación de sus lesiones físicas, puesto que, fue dos intervenciones quirúrgicas para volver al estado o a uno similar al que tenía ella a la ocurrencia del suceso delictivo, así como, como la gran magnitud del shock emocional y psicológico vivido debido a un suceso extremadamente violento y desmedido, calificado en sede penal como constitutivo del delito de apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes (artículo 150 letra d) del Código Penal), se regulará el monto de la indemnización en **\$45.000.000.- (cuarenta y cinco millones de pesos)**, el que se estima prudente y razonable atendida la naturaleza y gravedad de los daños sufridos.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto a la indemnización de perjuicios solicitada a título de daño emergente respecto de la actora doña Cecilia Vargas Estay, éste se fundamenta en el hecho de que como madre de doña Aleksandra Rendic, tuvo que cubrir los montos correspondientes a la lesión sufrida por ésta última, los que se tradujeron en gastos de hospitalización, medicamentos, procedimientos médicos, transporte, cirugías, kinesioterapia, etc.

En esta parte, lo primero que debe señalarse, es que la actora Rendic Vargas, a la época de los hechos que dieron lugar al presente juicio, se encontraba estudiando Trabajo social en el Instituto del Valle por lo que, su madre, tal como da cuenta la declaración de los testigos, y lo declarado en el informe psicológico contenido en la carpeta investigativa de Fiscalía, acompañada a esta causa, solventó los gastos producto de la lesión por ella sufrida, de lo que se da cuenta según los documentos acompañados consistentes en: Boleta 02018 de fecha 05 de junio de 2017, por un valor de \$30.000.-, Bono atención de Fonasa 346143912 de fecha 12 de junio de 2017 por \$112.376., Bono atención Fonasa 346143914 de fecha 12 de junio de 2017 por \$20.300., Bono atención Fonasa 346143913 de fecha 12 de junio de 2017 por \$34.490., Factura Hospital Militar 0473607 de fecha 13 de junio de 2017 por \$900.000., Factura Hospital Militar 201780 de fecha 30 de junio de 2017 por \$714.662., Comprobante transferencia Cecilia Vargas a ACHS por \$2.284.523 de fecha 06 de abril de 2018, Boleta electrónica ACHS 37803 y Comprobante de pago Hospital del Trabajador de fecha 06 de marzo de 2018 por \$1.845.768.

Por lo que realizando una simple operación aritmética puede obtenerse que la demandante logró acreditar a la época de los hechos, por concepto de gastos médicos, tratamiento médico, así como los respectivos gastos farmacológicos, la cantidad de **\$5.942.119.-**, cifra por la cual se **acogerá parcialmente** la demanda en este punto, por la suma antes señalada, tal como se dirá en lo resolutivo de la sentencia.

En cuanto al ítem indemnizatorio indicado respecto a que la totalidad



de los gastos de médicos alcanzaría la suma de \$6.336.353.- fuera del monto efectivamente acreditado en el párrafo anterior, y sin perjuicio que ello pudiese tener una justificación en las secuelas que pudo causarle las lesiones que sufrió su hija doña Aleksandra Rendic, lo único cierto que existe en el proceso es que, como resultado del mismo, la actora, como ya quedó establecido en este fallo, sufrió una lesión catalogada como grave por el servicio médico legal, consistente en – fractura distal de peroné izquierdo y en rodilla izquierda rotura de ligamentos, compatible con sufrir una torsión en su extremidad inferior izquierda, lo que según lo indicado por dicho servicio - suponía lesiones físicas que importaban un tiempo de recuperación mayor a 30 días, sin que se aportaran al proceso otras pruebas, que pudiesen haber completado el monto señalado en el libelo. motivo por el cual, **se rechazará** sobre este punto

VIGÉSIMO OCTAVO: Que en lo que respecta al **daño moral, reclamado por la actora doña Cecilia Vargas Estay**, en cuanto a la prueba rendida para acreditar este perjuicio, además de la probanzas ya analizadas y ponderadas con arreglo a la ley, tomando en especial consideración el informe psicológico del Servicio Médico Legal y la declaración de los testigos, hacen posible construir una serie de presunciones judiciales que permiten arribar a la conclusión incuestionable que esta demandante, como madre de la Srta. Rendic Vagas, experimentó el daño que reclama pues, en su rol de madre y trabajadora, se vio expuesta a una situación violenta, injusta y denigrante como consecuencia de las vulneraciones físicas de que fue víctima su hija, quien – como se concluyó más arriba- debido a la golpiza que le propinó un funcionario del Estado en el ejercicio de sus funciones, no podía desplazarse libremente y con normalidad, pues la fractura que experimentó en una de sus extremidades inferiores, conllevó a que solo pudiese desplazarse empleando una silla de ruedas.

En este escenario, resulta ser manifiesto que esta actora, debió hacerse cargo de los cuidados de su hija, debido a la dependencia económica de ésta, primero, porque vivían en el mismo hogar y, segundo, porque a sus 24 años se encontraba estudiando una carrera en un Instituto técnico profesional de la ciudad, y no desarrollaba ninguna actividad laboral que importara la percepción de una remuneración propia.

De lo expuesto, fluye que la Sra. Vargas Estay se vio expuesta a vivir una situación de postergación, incomodidad y frustración debido al hecho dañoso, por ser evidente que éste es capaz de causar, en cualquier persona de rango medio, una afectación a sus emociones, debido a las alteraciones que le provocan en su estilo de vida como en el estado normal de cosas, más aun si



se toma en consideración - tal como resultó probado en esta sentencia - que la actora, debió soportar diversos desembolsos económicos en la recuperación física y psicológica de su hija, quien quedó imposibilitada a tal punto de no poder desenvolverse en la vida cotidiana normal, sin la asistencia de un tercero, rol que ocupó su madre, tal como lo señala una de sus testigos y refrendado en la anamnesis del informe emanado del Servicio Médico Legal, antecedentes todos que permiten concluir que ella sufrió un desgaste que afectó la esfera de sus emociones, lo que debe ser necesariamente indemnizado . En este sentido, la testigo doña Constanza Olmos Flores refirió que cuando visitaba a la señora Vargas, se percató que se encontraba vulnerable y lloraba, por estar en una situación de estrés, *“... puesto que su hija le faltaba el respeto le gritaba y no quería nada más con su vida, sin saber más qué hacer con su hija, ya que descargaba todo su enojo con su madre.”*

En lo referente al monto indemnizatorio, teniendo únicamente en consideración que el daño moral experimentado por la actora, se estima razonable y prudente, atendida la naturaleza y la entidad del mismo, fijar dicha suma dineraria en la cantidad de **\$8.000.000.-**, por lo que se **accederá parcialmente** a la demanda en esta parte, tal y como se dirá en resolutive.

VIGÉSIMO NOVENO: Que los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran o modifican las conclusiones a las que se ha arribado.

TRIGÉSIMO: Que no habiendo resultado totalmente vencida la parte demandada y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 inciso primero del Código de Procedimiento Civil, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y Vistos además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 342 y siguientes, 426 del Código de Procedimiento Civil; 19, 20, 1698, 2320 y 2322 del Código Civil; 59, 60, 61, 68, 157 y 261 del Código Procesal Penal; Código de Procedimiento Penal; Código Penal; Constitución Política de la República; Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado; y Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile; **SE DECLARA QUE:**

I.- SE RECHAZA la tacha deducida por la demandada respecto del testigo Juan Pablo Galdames Ávalos formulada a folio 76.

II.- SE RECHAZA la excepción de prescripción de la acción resarcitoria, opuesta en la contestación de la demanda.

III.- SE ACOGE parcialmente la demanda deducida en lo principal del escrito de folio 1, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile, a pagar a las demandantes, las siguientes cantidades dinerarias :



a) A doña **Aleksandra Katarina Rendic Vargas**, por concepto de indemnización de perjuicios por **daño moral**, la suma de **\$45.000.000.-** (cuarenta y cinco millones de pesos),.

b) A doña **Cecilia Vargas Estay**, por el ítem de **daño emergente**, la cantidad de **\$5.942.119.-** (cinco millones novecientos cuarenta y dos mil ciento diecinueve pesos) y a la suma de **\$8.000.000.-** (ocho millones de pesos) por concepto de **daño moral**.

IV.- Las sumas antes referidas deberán liquidarse en su oportunidad, aplicándose los reajustes e intereses que correspondan entre la fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia y la de su pago efectivo.

V.- Se rechaza la demanda en cuanto a lo demás solicitado por concepto de daño emergente y daño moral.

VI.- No se condena en costas a la parte demandada, por no haber resultado completamente vencida en juicio.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad contemplada en el artículo 319 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

ROL C-1362-2021

Dictada por don **ARTURO ANDRÉS IRIBARREN PÉREZ**, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras de Antofagasta.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. En Antofagasta, once de Abril de dos mil veinticuatro.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JVVLMXPWBX